



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Sociología

Maestría en Sociología- Profundización

PROPUESTA DE TRABAJO FINAL

**"ACTORES SOCIALES Y CRISIS INSTITUCIONAL
DEL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA EN EL
ECUADOR: EJERCICIO ANALÍTICO DE
SOCIOLOGÍA POLÍTICA DE LA COYUNTURA DE
SEPTIEMBRE DE 2010".**

Tutor: Victor Reyes Morris
Alumna: Hilda Adriana Palacios Bonifaz

DEDICATORIA

A Dios, mi padre celestial; mis amados padres: Inés, Manuel; y Pablo, mi adorado hermano. Sin su amor y apoyo incondicional, esta maestría no hubiese sido posible.

AGRADECIMIENTO

A mi director, profesor Víctor Reyes y en especial al profesor Franklin Ramírez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Sede Ecuador, por su apoyo y direccionamiento.

ÍNDICE

Contenido	Página
Introducción	6
Resumen	9
CAPÍTULO I	10
Análisis de coyuntura con enfoque Marxista- Gramscismo.....	10
Matriz de análisis de coyuntura del 30-S en el Ecuador.....	13
Cronología de los sucesos en el 30-s	27
CAPÍTULO II	35
Movimientos sociales en el Ecuador	35
Marco teórico.....	41
Movimiento social	41
Actor social/político	43
Gobernabilidad	47
Violencia	48
CAPÍTULO III	51
Una mirada a los hechos	51
Los movimientos sociales y políticos, antes del 30-s	58
Dinámica de los actores sociales y políticos durante la revuelta	63
La policía ecuatoriana, otra insurrección	70

Integración regional, ¿la salvación de Correa?	70
Develando el Nuevo Plan Cóndor.....	73
CONCLUSIONES	75
BIBLIOGRAFÍA	79
ANEXOS	82

INTRODUCCIÓN

Ecuador se ha caracterizado por ser un país, donde la estabilidad política ha estado constantemente en la cuerda floja. Esto debido a que esta nación sudamericana ha tenido tres presidentes derrocados y 4 presidentes posicionados en ocho años (1997-2005), es decir que durante este periodo el Ecuador tuvo siete presidentes. Esto ocasionó que el mundo conociera al Ecuador, como un país ingobernable.

En 2010, durante el gobierno del presidente Rafael Correa ocurre un intento de golpe de Estado y magnicidio por parte de algunos miembros de la Policía Nacional, según versiones oficiales. Mientras que la coalición de oposición asegura que fue un autosequestro del presidente Correa. Con base en este acontecimiento, este estudio pretende analizar la dinámica de los protagonistas y antagonistas de este suceso. Los escenarios, las relaciones de fuerzas y en la coyuntura en la desarrollaron los acontecimientos alrededor del denominado 30-S.

Lo interesante de esta coyuntura en análisis, es que, si bien parecía un usual recurso en la historia política del Ecuador el derrocar un gobierno más, tuvo otro resultado, pues el propósito no se logró y este hecho quizás cambió la historia corriente de inestabilidad e ingobernabilidad de este país. Lo que ya supone un gran reto para el analista, hasta cierto punto, tener bajo su mirada un resultado relativamente inédito. Es ése, entonces el reto de hacer una contribución analítica al estudio de una coyuntura política de la historia reciente del Ecuador.

Es así que este estudio inicia, en su capítulo I, con un análisis de coyuntura con enfoque Marxista- Gramsciano, del cual se parte para realizar una matriz de coyuntura de los acontecimientos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, que permite visualizar todos los sucesos y sujetos que influyeron a que este suceso marque un momento violento y conflictivo en el gobierno del Presidente Rafael Correa. Además, como parte de este primer capítulo se introdujo una cronología de los hechos que permite ver paso a paso lo ocurridos hace siete años.

En el capítulo II, se muestra como los movimientos sociales y políticos ecuatorianos han sido caracterizados por la politización de las masas, especialmente las que corresponden a las organizaciones campesinas, desde que el país entra al orden civil en 1979 (luego de siete años de dictadura militar) y la emisión de una nueva Constitución ese mismo año, la que por primera vez reconoció el derecho de voto a los analfabetos. También, parte de este capítulo se introdujo un Marco Teórico donde se conceptualizó palabras claves que fueron básicas para entender el desarrollo del presente análisis.

Dentro del capítulo III, se hace una mirada ante los hechos donde se recapitula que en el 2007, Rafael Correa gana las elecciones y da vida política al movimiento Alianza PAIS. Este proyecto político denominado Revolución Ciudadana, con gran influencia de la Revolución Cubana y Bolivariana de Venezuela, realiza un cambio estructural del Estado, empezando con la conformación de la Asamblea Constituyente. A partir de este momento, existió un punto de quiebre entre los distintos movimientos sociales y políticos ecuatorianos que apoyaban al gobierno de Rafael Correa, así como, el distanciamiento de colaboradores cercanos del mismo régimen. Esta fractura política dio pie a que la oposición fortalezca sus estrategias en camino a “desestabilizar” el Gobierno, del presidente Correa, e impedir un supuesto hiperpresidencialismo¹.

Este último capítulo reseña que en septiembre de 2010 ocurre, lo que críticos y opositores al gobierno del presidente Rafael Correa, llamaron un auto-secuestro o show mediático, todo con la finalidad- según dicen- de evitar un derrocamiento que “el pueblo de Quito y el país entero anhelaba. Pero al parecer, la oposición conformada por el partido Sociedad Patriótica (PSP), liderada por el derrocado ex presidente Lucio Gutiérrez y grupos de la ultra derecha como el partido Social Cristiano- Madera de Guerrero (su líder el fallecido ex presidente León Febres Cordero (1984-1988) acusado de ser un gobierno represivo que atentó contra los derechos humanos), quienes desde el 2009 querían acercamientos con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Movimiento Popular Democrático (MPD) y el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, con el objetivo de lograr una polarización en la escena política ecuatoriana.

¹ El hiperpresidencialismo, en definitiva: 1. amenaza a la democracia; 2. controla “todas” las instituciones; 3. apela al poder de las urnas; 4. concentra el Estado en “liderazgos personalistas” (...), “produce un plus de legitimidad que fácilmente puede derivar hacia el autoritarismo y la concentración de poder, si no existen instituciones que lo controlen y lo neutralicen (Paz y Miño, 2012).

De igual manera, dentro de este capítulo se expone algunas hipótesis sobre las acciones policiales, una de ellas fue la aprobación de la Ley del Servicio Público, el cual desató un malestar en algunos miembros de la Fuerza Pública, pues argumentaban que la Policía ecuatoriana se veía limitada en los beneficios como condecoraciones, sueldos, jubilaciones, etc.

Es decir, la coyuntura se abría con una crisis de legitimación del Régimen, porque de su alianza original de apoyo se desgajaban fuerzas identificadas con la izquierda que el gobierno decía representar, especialmente el emblemático movimiento indígena encarnado en la Conaie y Pachakutik, entre otras organizaciones.

El motín policial que se formó el 30-s fueron quienes iniciaron uno de los momentos de mayor violencia en el Ecuador. Los motivos fueron varios, nunca existió una sola razón, pues éste tan solo fue el detonante de varios sucesos ocurridos durante el gobierno correísta (Ramírez, 2010).

Finalmente, este capítulo contempla el respaldo obtenido por Rafael Correa, para evitar que estos sucesos terminaran en un golpe de Estado debido ya al apoyo recibido por los Organismos de Integración Regional como Unasur y la OEA. Los fundamentos del golpismo tienen profundas raíces en las sociedades latinoamericanas y en la política exterior de Estados Unidos hacia los pueblos latinoamericanos (Golinger, 2010).

Si se repasa la historia reciente de nuestros países se comprueba que las tentativas golpistas tuvieron lugar en Venezuela (2002), Bolivia (2008), Honduras (2009) y Ecuador (2010), es decir, en cuatro países caracterizados por ser el hogar de significativos procesos de transformación económica y social y, además, por estar integrados a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Esto parte de un nuevo Plan Cóndor, según Rafael Correa, el cual tiene como objetivo desacreditar mediante el bombardeo mediático, desprestigio a las acciones de los gobiernos progresistas y calumnias a los líderes socialistas elegidos democráticamente para despojarlos del poder mediante golpes de Estado y así la oligarquía local pueda recuperar espacios perdidos.

“Toda esta iniciativa es impulsada por los departamentos de Inteligencia de los Estados Unidos y otros grupos hegemónicos que forman parte de la geopolítica mundial”.

RESUMEN:

Este presente estudio pretende analizar el papel que jugaron los movimientos sociales y políticos, antes y durante el intento de golpe de Estado al gobierno del Presidente de Ecuador Rafael Correa, en la coyuntura de el 30 de septiembre de 2010. Se ha planteado varias hipótesis sobre la función de la Fuerza Pública ecuatoriana y su protagonismo en este acontecimiento, en donde- nuevamente- se puso en vilo la gobernabilidad del país, a partir de la insatisfacción por los cambios estructurales del Estado, durante el inicio del gobierno de la denominada Revolución Ciudadana.

También se ha considerado observar las acciones de los líderes y simpatizantes de los distintos movimientos políticos opositores y gobiernistas, quienes fueron los principales participantes en los hechos violentos ocurridos hace 5 años en el Ecuador; para el respectivo análisis de sociología política se ha usado planteamientos teóricos sobre poder, dominación, violencia, conflicto. Esto permitió realizar un análisis de coyuntura sobre los hechos ocurridos el 30-S, para entender las dinámicas de los actores políticos durante este acontecimiento que marcó la historia política del Ecuador.

CAPÍTULO I:

1. Análisis de coyuntura con enfoque Marxista- Gramscismo

Para entender el concepto de análisis de coyuntura se ha recurrido a dos teóricos clásicos: Karl Marx y Antonio Gramsci, quienes ha sido los pioneros en poner dentro de su literatura a esta teoría como un canon metodológico, al momento de analizar las situaciones políticas actuales.

Marx (1851) en su libro *El 18 Brumario* de Luis Bonaparte se reconstruye la escena política francesa en torno a los acontecimientos histórico-políticos en el escenario de la coyuntura que dio origen a la dictadura de Luis Bonaparte, y su autoproclamación como Emperador.

En este marco, Marx (1851) considera que dentro del análisis de coyuntura se contempla al poder político como al dominio institucional, al dominio de la “escena política”, mientras el poder social alude a la posición de clase en el ámbito de las relaciones de producción. Es decir, Marx desarrolló una concepción materialista de la historia donde los seres humanos cambiaban sus relaciones de producción, de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas.

El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia (Marx, 1851).

Karl Marx (1851) establece una “periodización histórica que le permite distinguir, para explicar estas transformaciones, los cambios en la correlación de fuerzas, la especificidad orgánica y los intereses de cada una de éstas, hasta arribar al cambio culminante: el golpe de Estado”.

Por lo tanto, el análisis de coyuntura es una correlación de fuerzas que tiene lugar en un ámbito de acción sociopolítico-cultural. Es una correlación que siempre ocurre con referencia a otros actores y que está condicionada por el contexto social y la posición de

quien realiza el análisis; por lo tanto esta teoría marxista permite visualizar la dinámica de una coyuntura que obedece a condicionamientos estructurales. Es una correlación que está inmersa en un contexto histórico social y es condicionada por sus dinámicas, la acción de los actores locales y la injerencia de actores y factores exógenos.

En un concepto muy parejo, Antonio Gramsci (1975), en su libro *Los Cuadernos de la Cárcel*, el análisis de coyuntura es considerar o calificar las situaciones como una relación entre fuerzas, como un producto de actores sociales que se oponen y articulan entre sí y poseen distinto grado de organización y coherencia. “La complejidad de los lazos que integran una coyuntura no puede ser reducida a expresión inmediata de la estructura: “la política es, de hecho, en cada ocasión el reflejo de las tendencias de desarrollo de la estructura, tendencias que no tienen por qué realizarse necesariamente”.

En la coyuntura intervienen también elementos aleatorios, es decir que para Gramsci las acciones políticas no pueden ser imputadas como “racionales” en términos de intereses objetivos; pueden ser “el resultado de un error de cálculo por parte de los dirigentes de las clases dominantes”.

Según Gramsci (1975), los criterios de interpretación sobre un espacio temporal de la coyuntura, se presentan “(...) como ocasionales, inmediatos, casi accidentales”. Esta relación inmediata entre los fenómenos genera constantes procesos de crisis que demuestran la forma como se afectan las relaciones de poder y la manera en la que los diversos actores sociales juegan un papel decisivo en las relaciones orgánicas presentes en la sociedad. La coyuntura se debe entender tanto para los procesos en donde se derivan crisis agudas, como para aquellos en donde el proceso es de desarrollo “progresivo” .

Las relaciones de fuerzas políticas para este autor de la coyuntura son “la estimación del grado de la homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzado por los varios grupos sociales. Este momento puede analizarse a su vez distinguiendo en él varios grados que corresponden a los diversos momentos de la conciencia política colectiva”.

Para Rodrigo Borja (1997), en el ámbito de lo político, la coyuntura es el conjunto de factores y circunstancias que concurren, en un momento dado, a crear una situación propicia o adversa para tomar una decisión o asumir una acción de orden público.

La coyuntura está formada por elementos sociales, políticos, económicos e, incluso, geográficos, climáticos y meteorológicos, locales e internacionales, pero es siempre una situación de corto plazo, que no alcanza a configurar un ciclo económico. Por eso se dice que una situación es coyuntural cuando es pasajera en el curso del proceso económico.

Por lo tanto, el análisis de coyuntura es una forma de conocer lo articulado y complejo de lo real, y su carácter conflictivo; es decir, conocer lo real significa identificar las características que configuran lo real histórico-social.

Para entenderlo con mayor simpleza, un análisis de coyuntura nos permite comprender los sucesos que ocurren en un momento determinado, integrando los eventos económicos, políticos, ideológicos, tanto locales como internacionales, en una explicación objetiva y profunda. Además fortalecer nuestra capacidad de análisis de la realidad y nuestra iniciativa de conducción y, al mismo tiempo, sentar las bases firmes para efectuar un plan de acción adecuado a las circunstancias.

1.1. Matriz de análisis de coyuntura del 30 de septiembre de 2010 en Ecuador

ACONTECIMIENTOS		
<p>Desde que el Presidente de la República Rafael Correa asumió el poder en enero de 2007, la situación política ecuatoriana tomó otro giro, ya que fue el fin del neoliberalismo y de la “partidocracia” y el inicio de un gobierno socialista/progresista denominado: Revolución Ciudadana. Este suceso dio paso a que las dinámicas de las fuerzas políticas tengan un constante roce, por las distintas acciones del gobierno de Rafael Correa; con esto se van creando estratégicamente acontecimientos, como el 30-s, que movilizan a una oposición dependiente de la crisis partidaria y de los rezagados grupos políticos de izquierda funcionales al neoliberalismo (Ramírez, 2012, p.2).</p>		
A	B	C
<p>La emergencia de Correa y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (2007) quebraron el dominio de las fuerzas del <i>establishment</i>, según Ramírez (2010), donde se profundizaron las perspectivas para la despartidización del orden político y abrieron una fase post-neoliberal de organización del Estado y la economía.</p> <p>Las fuerzas progresistas y populares del país ² plantearon proyecto normativos para alcanzar la justicia social de los grupos vulnerables. Mientras que los grupos de derecha y los sectores neoconservadores no tuvieron una decisiva participación, ya por primera vez en la historia del Ecuador, formaban</p>	<p>En septiembre de 2009, se realizó la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a fines de septiembre del 2009, en rechazo a la Ley de Recursos Hídricos y para retener su manejo de las instituciones públicas orientadas al sector indígena en educación, salud y desarrollo.</p> <p>En este acontecimiento profesor shuara Bosco Wizuma en Macas (capital de la provincia de Morona Santiago) muere a causa de perdigones disparado, inadvertidamente, según las investigaciones forenses por algún miembro de su propia comunidad. Esto fue el inicio para que la Conaie, Pachakutik y el MPD articularan un discurso de oposición caracterizando al</p>	<p>Ese conjunto de acontecimientos trazaron la política de “distanciamiento” creciente de varias organizaciones, sectores de intelectuales y de movimientos sociales, con el gobierno de la Revolución Ciudadana y el partido de gobierno Alianza PAIS.</p> <p>Es así que esta ruptura se fue dando poco a poco hasta el punto que los “grandes” aliados como el movimiento Ruptura de los 25 y algunos grupos de asambleístas del Partido Socialista- Frente Amplio (PSFA), decidieron romper con la coalición del partido oficialista y ser parte de la bancada opositora. Desde este punto, la polarización en el Ecuador empieza a</p>

² Esta alianza está compuesta por una heterogeneidad de sectores que apoyaron su candidatura en la primera y segunda vueltas: trabajadores del campo y la ciudad, semi-proletariado, sectores sociales intermedios y una pequeña burguesía pueblerina, intelectuales, sectores empresariales no monopólicos y un conjunto de movimientos sociales (Sylva y Quinteros, 2010, p.24).

parte de la bancada minoritaria en la Asamblea Constituyente, con una baja votación electoral.	gobierno como represivo, autoritario y hasta “fascista”, ya que lo acusaron de la muerte del docente.	tomar fuerza (Sylva & Quinteros, 2010, p.31-40)
--	---	---

ESCENARIOS

ECONÓMICO

La comparación entre la década de la Revolución Ciudadana y la década neoliberal que la precedió, permite ver las diferencias en la economía política de la distribución de la riqueza. Entre 1996 y el 2006, la economía ecuatoriana, medida a través del PIB nominal, creció 85% al pasar de 25.214 millones de dólares a \$46.802; mientras que entre el 2006 y el 2016 creció el 105,6% más, que se duplicó al alcanzar una producción estimada de 96.218 millones de dólares (Correa, 2017, p.4)

A	B	C
<p>En los 32 años de vigencia de la democracia en Ecuador, el gobierno del Presidente Correa tuvo a su favor oportunidades económicas favorecedoras como: los altos precios internacionales del petróleo y reapropiación de los recursos nacionales (minería, zonas francas, telecomunicaciones, servicios públicos) . Siendo Ecuador un país petrolero, las altas regalías permitieron incrementar la inversión pública destinada a infraestructura (carretera, hospitales, escuelas) hidroeléctricas, “y hacia una gama de subsidios”. Sin embargo, la oposición, asegura que este “desmedido” gasto no estuvo acompañado con estímulos a la inversión extranjera, fortalecimiento empresarial y fomento de nuevas actividades productivas. Además, el gobierno de Rafael Correa dispuso la creación de una auditoría</p>	<p>A lo largo de la historia política del Ecuador, el país ha sido gobernado por regímenes con ideologías de derecha; y por ende planteando principios económicos que solo responden al capital. Por ejemplo, durante el gobierno del ex presidente León Febres Cordero, su gobierno se caracterizó por representar a los intereses económicos de los grupos hegemónicos del Ecuador, es decir privilegió los intereses privados por encima de los intereses públicos o colectivos. Durante su gobierno se mercantilizó servicios públicos y privatizó las instituciones del Estado. A la llegada a Carondelet del Presidente Correa, el planteamiento económico fue totalmente adverso, pues se centró crear políticas públicas para el bien común, con una política tributaria dirigida en especial- a las clases oligárquicas del país.</p>	<p>Un nuevo esquema de regulación y control de las finanzas y la banca nacional, fue otra de las medidas correístas. Esto con el fin de bajar las tasas de interés, conseguir la repatriación de sus reservas depositadas en el exterior, dinamizar el aparato productivo y apuntalar a la banca pública y cooperativa. Además, en la Constitución del 2008 se estableció que las propiedad accionaria de la banca se concentre solo en actividades ligadas al sector. Según documentos oficiales, esto se da con “el objetivo de desvincular a la banca y los grandes medios de comunicación, para evitar la especulación y manipulación de la información”. Este es el caso del Banco Pichincha y su vinculación con la cadena Televisiva Telemazonas de propiedad de banquero y empresario Fidel Egas. (Falconí, 2010, 38-39)</p>

<p>integral de la deuda externa ³ y de la declaratoria de ilegitimidad de ciertos tramos de endeudamiento, el Gobierno nacional encaminó procesos de judicialización contra presuntos implicados en la adquisición fraudulenta de crédito, declaró una moratoria técnica y, posteriormente, entró en <i>default</i> de una parte significativa de la deuda contenida en los bonos 2012 y 2030.</p>	<p>Según Correa, “quién más tiene, más paga”. Estas decisiones no fueron aceptadas por los gremios empresariales, sindicatos, organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a la pequeña burguesía universitaria.</p>	
---	---	--

POLÍTICO		
<p>El Gobierno de la Revolución Ciudadana consolida un liderazgo al construir un proyecto político con características contra-hegemónicas: con un discurso radical anti-neoliberal e izquierdista. La voluntad política del autoproclamado gobierno de la Revolución Ciudadana fue confrontar al establecimiento partidista y quebrar el dominio de las élites nacionales e internacionales en el Ecuador. La idea de Correa fue cambiar al Ecuador de un Estado- Bienestar a un Estado incluyente, a un Estado fuerte, emancipador del poder popular (Sousa, 2010, p. (63.75)</p>		
A	B	C
<p>La postergación de la aprobación de 14 leyes, a cargo de la Asamblea Nacional, entre ellas: la Ley de Educación Superior (LOES), la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Comunicación, entre otras, que debía aprobarse hasta noviembre del 2009, de acuerdo al mandato Constitucional, se pospuso hasta inicios del 2010. Estos retrasos hicieron un cambio en la correlación de fuerzas, ya que los grupos políticos y sociales a favor del gobierno se</p>	<p>La aprobación a la reforma de la Ley Orgánica de Servicio Público fue otro de los motivos de la insurrección policial, ya que en dicho cuerpo normativo se eliminaba todo tipo de condecoración y agasajos para los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esto produjo malestar en los miembros de la Fuerza Pública, señalaba la oposición. Sin embargo, dentro de esta Ley se contempló, también,</p>	<p>El intento de magnicidio en un escenario donde la Policía paralizó la función Legislativa, secuestró y agredió al Presidente en el Regimiento Quito y posteriormente secuestrado en el Hospital de la Policía; francotiradores apostados en los edificios vecinos a esta casa de salud atacaron con armas de fuego de grueso calibre a Rafael Correa y miembros de su seguridad y sociedad civil. Esto se habría tratado de un “magnicidio perfecto”, pues la muerte del Jefe de</p>

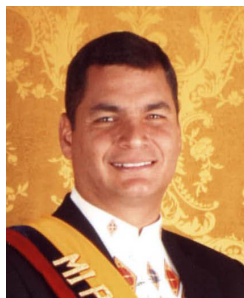
³ En 2007 por decreto ejecutivo se crea la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), conformada por expertos, ciudadanos y representantes de organizaciones nacionales e internacionales. La CAIC auditó diversas modalidades de adquisición crediticia a nivel comercial, multilateral, bilateral.

<p>desvinculen y se unan a la oposición de derecha y se conviertan en los nuevos aliados de una izquierda corporativa: conformándose la nueva derecha ecuatoriana (Sylva & Quinteros, 2010, p.25-27) Para los asambleísta de oposición, dichas leyes son impuestas por el Ejecutivo sin respetar la independencia del Legislativo. “Se requiere la aprobación inmediata de los proyectos normativos, sin una previa socialización, menos un debate con los distintos sectores de la sociedad”, recogen varios artículos de prensa.</p>	<p>escalas salariales en el cual se establece un incremento remunerativo para los diferentes rangos de la Policía y Fuerzas Armadas, por lo tanto ese no fue un detonante real para el intento de golpe de Estado, pues este tuvo tintes políticos orquestado por grupos partidistas opositores al gobierno de Rafael Correa (Paz y Mino, 2010, p.12.15).</p> <p>Otro malestar dentro de la Policía fue que en 2008, el Gobierno puso en marcha la Comisión de la Verdad, para examinar los abusos de las fuerzas policiales en los últimos 30 años: sus informes derivaron en el encarcelamiento de varios miembros de la institución.</p>	<p>Estado ecuatoriano se hubiera producido en medio de una “refriega”, donde los implicados estarían protegidos por el anonimato (Ortiz, 201, p. 29)</p>
--	---	--

ACTORES


PROTAGONISTAS

**RAFAEL CORREA
DELGADO**



- Rafael Correa es Presidente del Ecuador desde enero de 2007 hasta mayo de 2017.
- Es el Presidente y co-fundador del movimiento Alianza PAIS.
- Correa fue electo el presidente número 43 del Ecuador, por primera vez, con el 56,67% de los votos en las elecciones presidenciales de 2006, mediante balotaje con el multimillonario derechista Álvaro Noboa.
- Fue reelecto presidente de Ecuador, por segunda vez, en los comicios de 2009 en primera vuelta, con el 51,99 % de votos, frente al ex militar Lucio Gutiérrez, quien obtuvo el 28% de votos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Por tercera vez, en 2013 gana nuevamente el sillón presidencial, con el 57,7% de votos al banquero de ultra derecha Guillermo Lasso (22%). • El 2 de octubre de 2010, la empresa SP Investigaciones y Estudios, de Santiago Pérez, corrió una encuesta que señaló que la popularidad del presidente Rafael Correa subió diez puntos, llegando así al 75% de aceptación. • El jefe de Estado ecuatoriano ha sido el único presidente en la historia del país en ser reelegido por 10 años consecutivos, cuando Ecuador era conocido como el país ingobernable y con una fuerte trayectoria de inestabilidad política. • Desde su mandato abrió una coyuntura de reconstrucción de las capacidades estatales para planificar el desarrollo nacional, gobernar a los mercados y redistribuir la riqueza social. • Calificado como el “tecnócrata”, Rafael Correa ha sido reconocido con 15 Doctor Honoris Causa, por sus reformas políticas, económicas y sociales con base en los principios del Socialismo del siglo XXI.
<p>MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS Y SUS ALIADOS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • El movimiento político ecuatoriano Alianza PAIS (patria altiva i soberana) impulsada por el presidente Rafael Correa fue lanzada formalmente en Quito el 19 de febrero de 2006 con un "festival cívico" que sus militantes definieron como el "semillero de la nueva patria". • Fue oficializado por el antiguo Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 3 de abril de 2006, otorgándole la lista 35. • Doris Soliz es la actual secretaria de AP hasta mayo de 2017.

	<ul style="list-style-type: none"> • El movimiento se califica como una organización de corte socialista- democrata. • Los principios de Alianza PAIS se remontan en 1999, cuando Ricardo Patiño impulsó, junto con Alberto Acosta, Patricia Dávila, Ivonne Benítez y otros, la creación de Jubileo 2000 Red Guayaquil, una organización de la sociedad civil que investiga, denuncia y busca resolver el tema de la deuda exterior del Ecuador, también en que cual se integró posteriormente Rafael Correa, Gustavo Larrea y Fander Falconí⁴. • La creación de este movimiento se planteó como objetivo unir a la izquierda ecuatoriana, esa fue una de las propuestas realizadas por Rafael Correa durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2006. • Alianza PAIS surgió como una coalición política que estuvo formada por más de 30 organizaciones políticas y sociales, entre las cuales destacan: Partido Socialista Frente Amplio (PS-FA), Nuevo País, Acción Democrática Nacional, Iniciativa Ciudadana, Movimiento Ciudadano por la Nueva Democracia, Amauta Jatari, Alianza Bolivariana Alfarista, Poder Ciudadano, PTE, Alternativa democrática, y Ruptura de los 25. • Sin embargo algunos de esas organizaciones políticas como Ruptura de los 25 y assembleístas socialistas y del propio partido oficialista retiraron el apoyo al Presidente Correa.
<p align="center">POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desde 1979, la Policía ecuatoriana estuvo plagada de irregularidades y abuso institucional, muchas veces utilizado como un

⁴ Los nombrados en esta cita, también, fueron parte del gabinete del Presidente Rafael Correa, como ministros y secretarios de Estado.


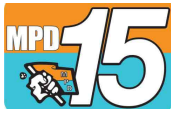




organismo a disposición del gobierno de turno como mecanismo de represión. Este es el caso de la creación de los Servicios de Investigación Criminal (SIC), una instancia utilizada como herramienta antisubversiva en el gobierno del ex presidente del partido de ultra derecha Social Cristiano, León Febres Cordero.

- Entre enero de 2007 y agosto de 2010, inició el proceso de depuración interna de la Policía Nacional, en el cual se concretaron 503 Tribunales de Disciplina. Fueron procesados 691 uniformados, de los cuales 367 fueron dados de baja, 171 arrestados, 95 absueltos y 68 sancionados con penas leves.
- En la actualidad se encuentran registrados más de 1.500 casos de abuso policial y las principales responsabilidades y sanciones recaen en los ejecutores de órdenes, la tropa y los oficiales de más baja graduación.
- Durante los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010, más de 47 policías fueron investigados, 13 imputados de sabotaje y terrorismo. Los dos policías que fueron detenidos, fueron indultados por el Presidente Rafael Correa.

COALICIÓN OPOSITORA DE IZQUIERDA


- El intento de golpe, también, contó con el apoyo activo y sincronizado del Movimiento Popular Democrático (MPD), en todas las provincias en las que ejerce control y ascendencia sobre el movimiento estudiantil.
- De acuerdo a la prensa oficialista, existió una “evidente y planificada” acción entre policías y MPD, ya que en Quito se registró a estudiantes de varios colegios movilizándose en contra del

  	<p>gobierno, cerrando calles, quemando llantas y lanzando consignas contra el gobierno; en la provincia de Cotopaxi, 400 estudiantes de la Universidad Técnica se “tomaron” el edificio de la Gobernación y maltrataron a 40 personas del gobierno que estaban concentradas ahí, sacándolas del edificio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las organizaciones indígenas habían perdido parte de su prestigio y capacidad de movilización luego de su frustrada experiencia, en apoyo al presidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez. Alrededor del agotamiento indígena se asistía además a una erosión del conjunto de la movilización social. Cléver Jiménez, jefe del bloque de Pachakutik, convocó al movimiento indígena, a los movimientos sociales y otras organizaciones, a constituir un “frente nacional” para exigir la salida de Correa; la asambleísta indígena, de Pachakutik Lourdes Tibán aplaudió la insurrección señalando: “¡Bien señores policías y militares, mil veces bien. Ya era hora que dejen de ser simple tropas!”.
<p style="text-align: center;">AYUDANTES</p> <p style="text-align: center;">PARTIDOS POLÍTICOS OLIGÁRQUICOS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Testimonios y constataciones que contempla el documental <i>Muchedumbre</i>, se evidencia la participación y adhesión a la “sublevación” de dirigentes y militantes de partidos y movimientos de derecha: Partido Sociedad Patriótica (PSP) Partido Socialcristiano (PSC), Madera de Guerrero), especialmente el PSP, ya implicado en proyectos desestabilizadores meses atrás. Durante la asonada, el Partido Sociedad Patriótica (PSP) registró mediaciones con los




“sublevados”, así como pronunciamientos de algunos dirigentes que revelaban su conocimiento y anuencia con el complot. Por ejemplo, la Escolta Policial de la Asamblea Nacional que estaba amotinada, dejaba pasar a las instalaciones a dirigentes de PSP, mientras impedía el ingreso de asambleístas del movimiento de gobierno.

- Asimismo, un alto dirigente del PSP estuvo en el epicentro del motín (los alrededores del Regimiento Quito) en el preciso instante en que el Presidente Correa era agredido y luego retenido. Ni durante, ni luego de los acontecimientos el PSP se ha pronunciado censurando el hecho. Más bien, expeditamente, y antes de que se libere al Presidente, el asambleísta Gilmar Gutiérrez y hermano del ex presidente Lucio Gutiérrez (del PSP) planteaba la “amnistía” a los sublevados.
- Según declaraciones del Presidente Correa a la prensa internacional, habría un testigo de la contratación de un sicario para asesinarlo por parte de Fidel Araujo, alto dirigente del PSP. “A medida que avanzan las investigaciones, aumentan las evidencias del alcance siniestro de su participación como mentalizador del magnicidio”.
- La influencia del Partido Sociedad Patriótica (PSP), organización identificada como la principal responsable del intento del golpe, con fuertes mediaciones con intereses de grandes grupos económicos conectados al capital monopólico y entregada a la oligarquía que apostó por ella en la última campaña electoral presidencial.
- Precisamente, durante este año el

	<p>PSP se había volcado a organizar su campaña de recolección de firmas para habilitarse como partido legalmente constituido, precisamente con el apoyo de sectores policiales y militares, sectores comprometidos luego en la asonada. (Sylva & Quinteros, 2010, p.33).</p> <ul style="list-style-type: none"> • El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien representa a un importante sector de la derecha, se pronunció significativamente en contra “del golpismo”; más tarde, representantes de las Cámaras de la Producción refrendaron esta postura y la Embajada de los Estados Unidos expresó su apoyo al régimen constitucional. • Con ello la revuelta careció del respaldo de actores decisivos y no cumplió así con los estándares de un golpe de Estado que piden ciertos analistas para reconocerlo como tal.
<p style="text-align: center;">DESTINATARIOS SOCIEDAD CIVIL</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • La movilización ciudadana en apoyo al Presidente y su gobierno, casi a los cuatro años de ejercicio del poder, en un país en el que la sociedad se ha movilizad históricamente para “tumbar” Presidentes, esto indicó que “el gobierno dispone de un consenso activo de la población y demuestra que la oposición partió de una premisa equivocada en su proyecto golpista: su pérdida de apoyo popular”. (Ramírez, 2010) • Los grupos que salieron en “defensa de la democracia” como fue su consigna, fue heterogenia, ya que no fueron únicamente los militantes de las bases de Alianza PAIS, sino grupo de amas de casa, de feministas, jóvenes universitarios, servidores públicos y privadas, en fin más 10 mil personas registraron los medios de comunicación congregados en la Plaza de la Independencia, frente

	<p>al Palacio Presidencial, al centro de Quito, que esperaban la llegada de Rafael Correa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La movilización social, por sobre el peligro frente a policías armados, que constantemente agredieron a periodistas, transeúntes, pobladores y a cualquiera que se acercara a sus teatros de operaciones, demostró, una vez más, que solo ese tipo de reacción popular podía frenar cualquier intento golpista. (Paz y Miño, 2010, p.11). • Por otra parte, la clase media urbana, inserta en la administración pública de la capital, en una ciudad burocrática como Quito, brilló por su ausencia, evidenciando que el “forajidismo⁵” quiteño, que inicialmente apoyó, aparentemente había abandonado al gobierno, y que a octubre del 2009 se había desgajado de dicha alianza. • Además, fueron grupos ciudadanos los que acudieron a defender y proteger las instalaciones de Radio y Televisión Públicas (EcuadorTV) asaltadas por una turba de personas desafectas al régimen.
<p style="text-align: center;">AYUDANTES</p> <p style="text-align: center;">MEDIOS DE COMUNICACIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El portal web Ecuador Inmediato denunció la existencia de un plan para destruir sus instalaciones, junto con las de Radio La Luna y Radio Tarqui de Quito, consideradas “correístas”, y que la información de inteligencia fue proporcionada por los agentes de seguridad policial asignados a los ministros y otros funcionarios, que conocían bien de las instalaciones

⁵ Llámese así en Ecuador a un movimiento de acción y protesta contra el Gobierno de Lucio Gutiérrez, compuesto por sectores urbanos de Quito que luego apoyó el ascenso del Presidente Correa al poder.

	<p>y equipos pues siempre acompañaban a sus autoridades a las entrevistas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Presidente Correa dijo que los medios de comunicación privados fueron parte de este acontecimiento del 30-S, ya que fueron “el partido Medial de la Derecha”. • La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) ordena Cadena Nacional de radio y televisión indefinida e ininterrumpida, “para informar sobre los hechos que ocurrían en el país”.
---	---

RELACIÓN DE FUERZA	
FUERZAS OPOSITORAS	
	<ul style="list-style-type: none"> • Los resultados electorales del 2006 recogían la falta de apoyo popular a los partidos políticos tradicionales. El candidato del movimiento Pachakutik apenas alcanzó 2,19% de los sufragios, el peor resultado obtenido por el movimiento desde sus orígenes en 1995. El MPD obtuvo 1,3% de la votación, según datos del ex Tribunal Supremo Electoral. • Entre 1995 y 2006, el promedio de credibilidad de los partidos no llegaba al 8%. En 1997, el 48% de la ciudadanía manifestaba que la democracia puede funcionar sin ellos. En 2008, el porcentaje de ecuatorianos con esta posición se incrementa a 61 puntos porcentuales.⁶ • Para 1998, el 73% de los ecuatorianos afirmaban confiar en la economía de mercado. Cuatro años más tarde dicha cifra descendía al 54% y en 2007 al 44%, de acuerdo al informe de Latinobarómetro de 2007. • El rol de las ONG y la cooperación internacional ha sido clave para la disputa de la construcción de la agenda pública con los tradicionales decisores. Foros públicos, plantones, marchas y conciertos completaban el arco de repertorios de presión con que, desde sus particulares agendas, se posicionaban los distintos actores sociales en la Convención (Ramírez, 2010, p.40).
FUERZAS OFICIALISTAS	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ocho de cada diez ciudadanos se pronunció a favor de la instalación de la Convención en el referéndum convocado en marzo 2007. La izquierda triunfó ampliamente, además, en las elecciones para constituyentes a fines de ese año: Alianza PAIS obtuvo 80 de los 130 curules y el resto de fuerzas progresistas

⁶ F. Freidenberg, 2000, “Percepciones ciudadanas hacia la democracia y las instituciones en los países andinos”, en *Ecuador Debate* 50, agosto, Quito: CAAP (pp. 205-218); y SENPLADES-INEC, 2008, *Primera Encuesta Nacional sobre Participación Ciudadana*, Quito.

- 10 más (PK, MPD, Izquierda Democrática)
- La contundencia de los resultados electorales consolidaba la proyección de la Revolución Ciudadana y dejaba a las elites y partidos dominantes sin mayor capacidad de incidencia en los debates constitucionales.
 - En septiembre 2008, con la amplia aprobación popular de la nueva Carta Magna -63% de los votos- se consagraba el declive electoral de las coaliciones que se habían alternado en el poder desde mediados de los ochenta.
 - Con las elecciones del 2009 se modificó la tendencia de que los partidos actuaban únicamente como “organizaciones regionales”, poco representativas del conjunto del país. El presidente Rafael Correa ganó en 20 provincias electorales mientras que Lucio Gutiérrez lo hizo en 7.
 - La tensión y beligerancia entre Correa y, sobre todo, las organizaciones indígenas, se mantuvo constante, enero de 2009. Los primeros embates se dieron cuando los sectores indígenas y ambientalistas anunciaban su resistencia a la minería y acusaban al gobierno de neoliberal. Correa respondió violentamente. Habló de los peligros que representa el “izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil” para el proyecto nacional de cambio político. En adelante, la estrategia gubernamental pareció reorientar la polarización hacia la dirigencia indígena.

ARTICULACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y COYUNTURA

ECUADOR EL PAÍS INGOBERNABLE	EL NUEVO PLAN CÓNDOR	INTEGRACIÓN REGIONAL
<p>Ecuador se ha caracterizado por ser un país, donde la estabilidad política ha estado constantemente en la cuerda floja. Esto debido a que esta nación sudamericana ha tenido tres presidentes derrocados y cuatro presidentes posicionados en ocho años (1997-2005), es decir que durante este periodo el Ecuador tuvo siete presidentes. Esto ocasionó que el mundo conociera al Ecuador, como el país ingobernable.</p> <p>No existe una línea de continuidad entre el “30-S” y los “golpes” a través de los cuales fueron derrocados Abdalá Bucaram (6 de febrero de 1997); Rosalía Arteaga,</p>	<p>El nuevo Plan Cóndor consiste en que “los poderes fácticos, que hemos osado desafiar, utilizan métodos como el bombardeo mediático, los golpes de Estado parlamentarios, el acoso económico, la difamación de líderes democráticamente electos, los jueces venales, entre otros métodos, para tratar de recuperar sus espacios perdidos”, así lo explicó el Presidente Rafael Correa, durante su discurso en el III Encuentro Progresista Latinoamericano (Elap), realizado el septiembre de 2016 en Quito- Ecuador.</p> <p>Por ello, En América Latina continúa el peligro latente de un golpe de Estado contra aquellos</p>	<p>Los fundamentos del golpismo tienen profundas raíces en las sociedades latinoamericanas y en la política exterior de Estados Unidos hacia esta parte del mundo. Ningún gobierno de derecha fue perturbado por el golpismo, cuyo signo político oligárquico e imperialista es inocultable (Boron, 2010).</p> <p>Por ello, apenas conocidos los sucesos del Ecuador, se movilizaron los gobiernos latinoamericanos, fue convocada una urgente reunión de Unasur y sus cancilleres llegaron hasta Quito. Todo ello ha favorecido al Ecuador y los “golpistas” no pudieron progresar.</p> <p>De igual manera, el Secretario de la OEA, José</p>

<p>presidenta por un día y ex vicepresidenta de Bucaram; Jamil Mahuad (21 de enero de 2000) y Lucio Gutiérrez (20 de abril de 2005).</p> <p>En el derrocamiento de los tres mandatarios nombrados hubo verdaderas rebeliones nacional-populares. Aprovechando de ellas se movilizaron sectores interesados y ambiciosos de la clase política que transformaron la explosión social en golpes de Estado a su favor.</p> <p>En los tres casos, la rebelión nacional y popular fue utilizada para golpes de Estado, tras los cuales se encontró a políticos que continuaron las mismas líneas de acción contra las que la sociedad se había movilizado. Los golpes de Estado, guardaron apariencia constitucional a través de forzadas interpretaciones legales y finalmente quedaron frustrados los intereses nacionales populares (Paz y Miño, 2010, p. 6-7)</p>	<p>gobiernos que se alejan de la economía “neoliberal”, que cuestionan el sistema internacional de la globalización transnacional, que no siguen más los intereses de las oligarquías y poderosos capitalistas internos, que adoptan políticas nacionalistas y soberanas frente al “imperialismo” y que replantean tanto la institucionalización del Estado como su acción y misión preferente para las clases medias, trabajadores y sectores populares (Paz y Miño, 2010, 9-10)</p> <p>Recordemos que se han producido golpes de Estado y otros intentos a gobiernos progresistas como al ex presidente Hugo Chávez (Venezuela) en 2002, Evo Morales (Bolivia) 2008, el hondureño Mel Zelaya en 2009 (efectivamente derrocado) y en 2010 Rafael Correa, entre otros.</p>	<p>Miguel Insulza, que en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente admitió haber creído que el golpe en Honduras fue "solamente una excepción", pero que tras observar lo ocurrido en Ecuador era evidente que el riesgo de repetición existe, según los medios de comunicación.</p>
---	--	--

1.2. Cronología de los acontecimientos ocurridos en Ecuador, el 30 de septiembre de 2010

Poder, potencia, fuerza, autoridad y violencia no serían más que palabras para indicar los medios por los que el hombre domina al hombre; se emplean como sinónimos porque poseen la misma función. Sólo después de que se deja de reducir los asuntos públicos al tema del dominio, aparecerán o, más bien, reaparecerán en su auténtica diversidad los datos originales en el terreno de los asuntos humanos.

H. Arendt

El Ecuador amanece un 30 de septiembre del 2010, con la protesta de un grupo de más de 500 policías que se amotinan del Regimiento Quito #1, exigiendo -en un principio- la no aprobación de la Ley de Servicio Público porque, según lo que manifestaron los Policías y Militares, eliminaba bonificaciones por ascensos y condecoraciones, sin embargo, nadie imaginaba cómo terminaría este día negro para la historia del país.

Progresivamente, otros cuarteles en el país se unían a los policías quiteños. Los medios reportaron que también Cuenca quedó desguarnecida. En Guayaquil, los policías habían bloqueado el puente de la Unidad Nacional. Al mismo tiempo, el aeropuerto de Quito cerró su funcionamiento pues fue bloqueado por elementos de tropa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). En las siguientes horas estuvo claro que en todo el país la insubordinación policial nacida en la capital, tenía amplia difusión.

Cerca de las 9:00, la Asamblea Legislativa fue escenario de intensas grescas después de que la Escolta Legislativa impidiera, según los asambleístas, su ingreso. Algunos debieron subir la cerca metálica para ingresar al recinto y una legisladora sufrió asfixia. Por ese hecho, Rolando Tapia, jefe de la Escolta, y 5 policías más fueron sentenciados por presuntamente atentar contra la seguridad del Estado.⁷

⁷ Para Tapia se dictó 3 años de prisión, pero su defensa apeló la sentencia. También, a este sitio, llegó una concentración de unas 150 personas de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y del Frente Revolucionario de Izquierda (FRIU) y del

En otro sitio de la ciudad de Quito, un grupo de militares también se adhirieron a la protesta en el Complejo Militar de La Recoleta y en la Base Aérea de Quito. En el primer sitio, quemaron llantas y bloquearon el paso de la avenida Maldonado, sur de la ciudad capital. Mientras esto ocurría, unos 400 efectivos de la Fuerza Aérea se tomaron la Base. Esto produjo la suspensión de las operaciones del aeropuerto Mariscal Sucre hasta alrededor de las 19:00⁸.

Además, a esta hora ya se desarrollaban manifestaciones policiales en otras ciudades del Ecuador como en Riobamba, Latacunga, Guaranda, Ambato, Cuenca, Loja, Santo Domingo, Ibarra, Machala, Manta, con quema de llantas y consignas contra el Gobierno. En Guayaquil, los saqueos, bloqueos y asaltos alteraron a la ciudad. Se suspendieron las clases en todo el país⁹.

El reloj marcaba las 9:25, cuando el Presidente Rafael Correa llega al Regimiento Quito y desde una ventana que da al patio del cuartel, el Presidente Correa se dirigió a los policías. Su intención fue convencerles que el régimen había mejorado sustancialmente las remuneraciones, las edificaciones, el equipamiento técnico incluidas sus armas y la calidad de su institución; que no había razones para protestar; y que la nueva Ley de Servicio Público incluso les beneficiaba. Nada se quería escuchar. Y en medio del griterío contra el Mandatario, se escucharon las voces “Eso lo hizo Lucio” en alusión al ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), a través de las cuales se quería dar a entender que las mejoras en la policía habían sido obra de este ex coronel del Ejército.

Después de unos 45 minutos, el Presidente Correa logra entrar al edificio del Regimiento y desde la ventana del tercer piso de dicho edificio, el Presidente se dirige a los amotinados para explicar el alcance de la normativa, pero se escuchan gritos de rechazo y a favor de Lucio Gutiérrez, ex presidente de la República, derrocado en el 2005. Correa totalmente eufórico tironeó su corbata y exclamó: “Aquí estoy, si quieren matar al Presidente mátenme, mátenlo si les da la gana”.

Correa apoyado con un bastón, para no afectar su rodilla recién operada, se abrió paso entre el tumulto junto al ministro del Interior (de ese momento), Gustavo Jalkh, fueron

Movimiento Popular Democrático (MPD) a respaldar la paralización de los uniformados.

⁸ Entre los militares se registraron tres incidentes, de lo que se conoce: la toma del aeropuerto de Quito, de Latacunga y un conato de conflicto en el Ministerio de Defensa. Un hecho llamativo, sin embargo, es que el apoyo del Comando Conjunto al gobierno constitucional ocurrió varias horas luego de los incidentes.

⁹ Según analistas económicos de diario El Comercio, los saqueos dejaron unos \$120 millones de dólares en pérdidas en locales comerciales.

sacados con bombas lacrimógenas y agresiones por parte de los insubordinados. Mientras el Comandante General de la Policía, Freddy Martínez, intentaba calmar a sus subalternos, sin éxito.

En medio de una nube de gas lacrimógeno, el Presidente pretendía abandonar el recinto, pero algunos Policías intentaban evitar su salida, se acercaban al Mandatario para golpear la pierna operada hace pocos meses y quitarle la máscara anti-gas. Miembros de la Escolta Presidencial conducen al Presidente Rafael Correa al Hospital de la Policía, lugar contiguo al Regimiento Quito, en donde recibe atención emergente. De acuerdo con las declaraciones del Presidente y su cuerpo de seguridad, el ex director del Hospital impidió el ingreso de Correa a la casa de salud tras la agresión sufrida por el mandatario en el Regimiento.

Al tiempo que, en otro punto de la ciudad de Quito, un grupo de Policías se toman la sede de la Asamblea Nacional e impiden el acceso de los Legisladores del Oficialismo, pocos minutos después, los asambleístas de oposición, los únicos que estaban dentro del centro Legislativo, realizan una rueda de prensa solicitando amnistía para todos los Policías sublevados. El pedido fue expuesto por Enrique Herrería, asambleísta del partido Social Cristiano- Madera de Guerrero, acompañado por el asambleísta Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica.

Pocas horas después, en rueda de prensa y junto al entonces Jefe de Estado Mayor de la Policía, Florencio Ruiz, un grupo de insubordinados leyó un pliego de nueve peticiones e hizo un llamado a deponer la protesta. Pero el paro continuó¹⁰. Durante ese día, hubo intentos de acuerdo entre el Gobierno y los insubordinados. Cuando se encontraba instalado en el tercer piso del Hospital, en su informe a la Fiscalía, el Presidente relata que en la tarde fue visitado por dos comisiones de representantes de los insubordinados, a quienes les explicó la normativa. “Me confesaron que ni habían leído la Ley (...) me dijeron que iban a deponer la medida de hecho debido a que no existió fundamento alguno para haberla siquiera iniciado, pero eso nunca ocurrió”.

Hacia el mediodía en Guayaquil cerraban sus puertas numerosos comercios y empresas, en tanto se reportaba el asalto a algunos locales, incluso sucursales bancarias. En todo el país hubo propietarios que cerraron sus negocios. Por disposición de las autoridades

¹⁰ Meses después de los incidentes del nombrado 30-s, Ruiz fue el primer general en ser indagado por los hechos del 30-S.

competentes se suspendieron las clases en escuelas, colegios y universidades. Buena parte del transporte interprovincial se paralizó. En Quito, el municipio debió suspender el funcionamiento del transporte público del “Trolebus” y la “Ecovía”. En todo el país se generalizó la incertidumbre ante los acontecimientos.

Logra el Presidente ingresar al Hospital de la Policía y desde la habitación el Mandatario pudo comunicarse con personas de su despacho y contar con alguna noticia de los acontecimientos externos. Como se le exigía derogar la Ley causante de la protesta, se le conminaba y se le retenía, el Presidente cuenta que volvió a decir a sus captores que si querían podían matarlo, pero que él no cedería en nada ante el chantaje, añadiendo: “De aquí salgo como Presidente o como cadáver”.

Pasado el mediodía, en entrevista telefónica a Radio Pública, el Presidente denuncia intentos de magnicidio y secuestro en su contra y advierte sobre tintes de golpe de Estado. Además, Correa asegura que hay impactos de bala en las ventanas de su habitación de la casa de salud.

Cerca de las 14:30, el ex Jefe de Comando Conjunto, Ernesto González, reafirma su lealtad al Presidente Rafael Correa, durante una rueda de prensa concedida desde el Ministerio de Defensa.

Posteriormente, el Canciller de la República, Ricardo Patiño llama al pueblo a manifestar su apoyo e invita al pueblo quiteño “a rescatar al Presidente”. Posteriormente se declara Estado de Excepción en todo el país, mediante el Decreto Ejecutivo No. 488¹¹.

Enseguida se conocieron las reacciones de rechazo de algunos ciudadanos, a los policías insurrectos y de apoyo de la población al Presidente Correa en diversas ciudades y regiones del país. Ante centenares de personas congregadas en la Plaza Grande o de la Independencia y desde uno de los balcones del Palacio de Gobierno, Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exteriores “movió” a los quiteños y pidió que una parte de quienes ahí se concentraban pasaran a respaldar al Primer Mandatario, “secuestrado en el hospital policial”.

Al llegar al hospital, el entonces Ministro Patiño fue agredido. Y las personas que

¹¹ El decreto señala en su artículo 1: “declarar Estado de Excepción en todo el territorio nacional, en razón de que algún integrante de la Policía Nacional ha distorsionado severamente o abandonado su misión de policías nacionales... lo que podría generar una conmoción interna en cuanto a la seguridad ciudadana garantizada y tutelada por la Constitución (...)

intentaban acercarse fueron golpeadas y vejadas. Los centenares de partidarios correístas que estuvieron a las puertas del hospital recibían continuamente bombas lacrimógenas, con la amenaza de que los francotiradores ubicados en la azotea del hospital bien podían haber disparado en cualquier momento, según fueron los comentarios en el mismo lugar. Los policías agredieron a los periodistas, camarógrafos, funcionarios y personas que se acercaban al hospital e incluso en sus alrededores, según lo testimoniaron los mismos reporteros de los distintos medios de comunicación que se encontraban cubriendo dichos sucesos.

A las 15:00, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) ordena Cadena Nacional de radio y televisión indefinida e ininterrumpida, para informar sobre los hechos que ocurrían en el país. Por lo que se pasó en vivo y en directo lo que sucedía a las afueras del Hospital de la Policía, donde Policías y Militares continuaban bombardeando con gases lacrimógenos y balas perdidas las inmediaciones del hospital e impidiendo la salida del Jefe de Estado.

El reloj marca las 15:30 y miles de ciudadanos se movilizan hacia el hospital de la Policía y a varios sitios de la ciudad capital. A lo largo de la avenida Mariana de Jesús, norte de Quito, Militantes del movimiento Alianza País, amas de casa, estudiantes, servidores públicos, caminan con banderas del partido oficialista y del Ecuador gritando: ¡Liberen a Correa! Esta multitud se encuentra con los Policías sublevados y algunos miembros de partidos opositores como el Coronel en servicio pasivo, Fidel Araujo, militante del partido Sociedad Patriótica, del ex Presidente, Lucio Gutiérrez. Según datos de la Fiscalía Nacional del Ecuador, Araujo, durante los disturbios, portaba un chaleco antibalas.

Más tarde, un grupo de unas 20 personas empezaron a manifestarse en la avenida Eloy Alfaro, norte de Quito, muchos de ellos militantes del partido Sociedad Patriótica (PSP), entre ellos Pablo Guerrero Martínez y la asambleísta Socialcristiana, María Alejandra Cevallos, caminaron a las instalaciones de Ecuador TV (televisión pública) e intentaron entrar a las instalaciones; sin embargo, la seguridad privada de la televisora no les permitió ingresar y eso enardeció aún más a los manifestantes logrando derribar la puerta principal mediante patadas y empujones; y gritando consignas: ¡libertad de expresión! Además, varios medios de comunicación registraron que Guerrero, quien lideraba esta protesta, mencionaba que había que “seguir las acciones de revelarse como ha hecho los

miembros de la Policía Nacional¹²”. La asambleísta Cevallos y Guerrero lograron entrar a uno de los sets de televisión, donde los periodistas, María Isabel Cevallos y Alex Mora, transmitían en vivo todos los acontecimientos que ocurrían en ese momento.

Pasaban las horas, y los simpatizantes al gobierno Nacional trataban de acceder al Hospital de la Policía, esto avivó la confrontación con los Policías desatándose en una violencia incontrolable, donde los Policías armados y entre ellos francotiradores disparaban sin medida, además de lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a la gente. Sin embargo, muchos de ellos se refugian en las casas aledañas, mientras que algunos Policías- muchos de ellos encapuchados- agredían a las personas con palos y así quitaban a los medios de comunicación las cámaras de video y fotográficas para que no exista un registro de lo ocurrido, según datos de la Presidencia de la República del Ecuador.

Ya terminaba la tarde y parecía que la oscuridad que anunciaba la llegada de la noche pintaba un escenario caótico, ya que la violencia se apodera y varios Policías fuertemente armados y con actitud agresiva intentan entrar a la fuerza en la habitación del Presidente Correa y disparan contra la multitud desarmada que se encontraba en el Hospital, entre ellos médicos, pacientes, periodistas. Esto ocurría, y pocos kilómetros en el centro norte de la capital, cientos de estudiantes de la Universidad Central, se manifestaban por la avenida Seis de Diciembre, un fuerte motín Policial llegó y empezó una batalla imparable; varios medios de comunicación registraron la persecución que existió contra los estudiantes y como resultado fallece un estudiante de dicha Universidad.

Los acontecimientos estaban bajo control de la Policía, quienes se ocultaron en los alrededores del Regimiento Quito y el Hospital de la Policía Nacional. Sin embargo, mientras la Fuerza Pública desarrollaba su rebelión, en ese momento ganó protagonismo la movilización social que respaldaba al gobierno, proveniente de diversos sectores, especialmente capas medias de la ciudad y juventud, que multitudinariamente se iban agrupando y rodeando estos lugares (Quintero & Sylva, 2010). La respuesta desde las fuerzas policiales sublevadas de sacar carros antimotines, lanzar bombas lacrimógenas e incluso disparos de arma de fuego que evidenciaba ya una situación de desesperación y falta de control.

¹² La Fiscalía encontró elementos de una irrupción violenta en el edificio de Ecuador TV para generar un supuesto caos. Trece ciudadanos fueron llamados a juicio en este caso.

Para la noche la sublevación policial estaba ahogada, no alcanzó respaldos sociales ni en las Fuerzas Armadas y tenía la condena de la opinión pública nacional e internacional; sin embargo, el gobierno apeló a un operativo militar como la vía para rescatar al Presidente del edificio del hospital de la policía. Los enfrentamientos directos entre policías y militares, que habían sido esporádicos durante la jornada, se volvieron frecuentes en la noche, alrededor del centro de la revuelta, provocando el fallecimiento de ocho personas (Ramos & Páez, 2010,).

Posteriormente, oficiales del Grupo de Intervención y Rescate GIR (grupo élite de la Policía) alistaron su operativo de rescate de Correa, pero ellos son recibidos por los policías insurrectos que usan sus armas para repeler a militares que tratan de liberar al Presidente. A eso de las 19h00 horas se evidenció la maniobra para liberar al Presidente. Llegaron hasta el hospital policial 700 militares expertos del comando de elite GIR, boinas rojas y tres unidades de Quito, junto con policías del GOE, con visores nocturnos, fusiles M16, pistolas Glock, radio-transmisores, chalecos antibalas, escudos protectores, máscaras antigases y otros instrumentos técnicos para el asalto (Ramos & Páez, 2010).

Después de un fuerte cruce de balas entre Policías y Militares, cerca de las 21:30 miembros del Ejército sacan al Presidente del Hospital de la Policía. Rafael Correa, quien fue sacado del Hospital de la Policía en un vehículo no blindado y en medio de un intenso tiroteo. En el auto, tres hombres decidieron cubrirlo con sus propios cuerpos. En la calle por la que se alejaba, el automóvil blindado recibió varios impactos de bala y un hombre del GIR (el policía Froilán Jiménez) cayó abatido por algún francotirador. Las escenas, transmitidas por la Televisión Pública, impactaron en todo el mundo. También se conoce hoy la grabación de unas comunicaciones de radio-patrulla en la que se escucha a policías sublevados que, con gruesas palabras, llaman abiertamente a que “Maten a Correa”.

El auto salió de la casa de salud protegido por un escudo humano de uniformados, entre los cuales se encontraba el policía de fuerzas especiales, Froilán Jiménez, quien cayó muerto tras recibir un impacto de bala.

El Mandatario llega al Palacio Presidencial de Carondelet, ubicado en el centro histórico de Quito, y simpatizantes de su movimiento Alianza País lo esperaron en la Plaza Grande para mostrar su apoyo. Rafael Correa hizo su aparición en uno de los balcones del Palacio de Gobierno para agradecer “la solidaridad y respaldo de los ciudadanos”.

Visiblemente afectado, el Presidente realiza una cadena nacional para comentar lo ocurrido durante el 30 de septiembre del 2010.

Como resultado de este violento acontecimiento, los resultados fueron: cinco muertos (dos Policías y dos Militares) y un estudiante universitario en Quito. A ellos se suman cinco personas más que fallecieron en Guayaquil en medio de los saqueos y el caos que se produjeron en dicha ciudad, durante la sublevación en la ciudad capital. Además, unos 274 heridos de los cuales 200 fueron en Quito, 28 en Guayaquil y 46 en el resto de las provincias. Además, más de 47 policías investigados, 13 imputados de sabotaje y terrorismo. Los dos policías que fueron detenidos, fueron indultados por el Presidente Rafael Correa.

CAPÍTULO II

2. Radiografía de los movimientos sociales y políticos en el Ecuador:

En el Ecuador, los movimientos sociales y políticos han sido caracterizados por la politización de las masas y de las organizaciones campesinas. Para Cueva (1993), el primer momento, es la vuelta del país al orden civil en 1979 (luego de siete años de dictadura militar) y la emisión de una nueva Constitución ese mismo año, la que por primera vez reconoció el derecho de voto a los analfabetos. “Grandes masas de indígenas iletrados comenzaron a participar, entonces, en aquel nivel de la política nacional, a la vez que los distintos partidos y candidatos se esforzaban por captar este importante contingente de nuevos votantes”.

El segundo acontecimiento consiste en la experiencia autoritaria vivida bajo el gobierno del ingeniero León Febres Cordero (1984-88). Es decir que en la medida en que el gobierno derechista de Febres Cordero arremete por igual contra todas las organizaciones y contra todos los intereses populares, de mestizos, negros e indios, éstos toman conciencia de que en última instancia y pese a su indudable especificidad, forman parte de la categoría pueblo. La dialéctica entre lo local, lo regional y lo nacional se transforma desde aquel instante, revelándose con mayor nitidez la dimensión política del problema (Cueva, 1993).

Para Ramírez (2010), el sinuoso desenvolvimiento del campo de los movimientos sociales en el Ecuador del siglo XXI está marcado por dos momentos contradictorios. El primero, el autor habla de la incorporación del Movimiento Indígena Ecuatoriano (MIE) en las arenas de la política instituida y su mismo acceso al poder político en 2003 se producen en un momento en que la contundencia de la crisis de legitimidad del sistema de representación, agudizada en 2005, llega al punto de canibalizar a todos los actores que habían orbitado en torno suyo, incluso aquellos que, como el MIE, operaron, desde dentro y desde fuera del sistema, en procura de su transformación radical. “La pérdida de la centralidad política que el movimiento indígena conquistara a lo largo de los años noventa y el reflujo de la movilización social aparecerían como correlatos de este momento” (p.18-20)

Y el segundo, de la estructura de oportunidades abiertas por la misma crisis del sistema político y la ilegitimidad de los partidos que permitió la emergencia y consolidación de un liderazgo de vocación transformacional-Rafael Correa es electo presidente a fines de 2006-que, “aun si ocupa prácticamente el mismo registro discursivo abierto por el MIE y sus aliados durante los años noventa, no integra a gran parte de dichas dinámicas en el centro del emergente bloque de articulaciones políticas que hoy en día impulsan un proceso de cambio en el país”. Entre las coincidencias programáticas con dicho bloque y la relativa subsidiaridad en la conducción del tránsito post-neoliberal-cuestiones visibles en el transcurso de la Asamblea Nacional Constituyente (2007-2008)- las organizaciones sociales han resentido un profundo desconcierto y desacomodo en sus alineamientos, programas y formas de acción colectiva (Ramírez, 2010)

La emergencia de Correa y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (2007) quebraron el dominio de las fuerzas del *establishment*, según Ramírez (2010), quien además dijo que se profundizaron las perspectivas para la despartidización del orden político y abrieron una fase post- neoliberal de organización del Estado y la economía. Al interior de estas coordenadas, las fuerzas progresistas y populares del país pujan- muchas veces entre sí- por fijar los contenidos específicos de los órdenes alternos. “La derecha y los sectores neoconservadores, muy disminuidos electoralmente, apenas si han alcanzado a reconducir dicho campo de debate”.

Unda (2011) considera que la Constitución de 2008 es un catálogo de derechos; muchos de ellos fueron obra de la presencia y de la constancia de los movimientos sociales, pues el autor considera que la Asamblea Constituyente (en 2008) fue un espacio de participación y “las propuestas encontraban canales para convertirse en realidades, por lo menos, en el papel sobre el que se escribía la nueva Constitución”.

Las organizaciones estaban presentes: viajaban a Montecristi, provincia de Manabí (sede de la Asamblea Constituyente), delegaciones numerosas o reducidas, que iban y volvían en función de los temas en debate; acampaban en las inmediaciones de la Asamblea; se instalaban en la ciudad. Y “lograron algo más: acercamientos, lugares de encuentro cuenta el autor, al tiempo que menciona que puede ser que la mayoría de propuestas que se llevaban tuvieran un horizonte limitado, particular” (Unda, 2011, p.56).

De acuerdo a Unda (2011) en la participación compartida de estos movimientos fueron tejiéndose solidaridades y acuerdos. Ambientalistas, jóvenes, indígenas, campesinos, mujeres, comenzaron a respaldarse, a construir confluencias, a alimentar las visiones propias con las visiones y los planteamientos de los otros. “Pero duró poco ya que no se logró tener el impulso suficiente como para traspasar el calendario de funcionamiento de la Asamblea Constituyente y las premuras formalistas del poder constituido”.

Y es que desde el primer levantamiento indígena de 1990 y, sobre todo, luego de tres revueltas cuyo desenlace fue un derrocamiento presidencial (1997, 2000, 2005), la batalla entre fuerzas consolidadas –los partidos políticos que dominaron la escena democrática desde el retorno en 1979– y actores emergentes –nuevas organizaciones y movimientos políticos y sociales– “se colocó como uno de los diferendos constitutivos de la democracia ecuatoriana”, mencionó. No se trataba de simples episodios de ingobernabilidad o de la fragilidad institucional de la arquitectura democrática, como una cierta ciencia política conservadora lo ha interpretado, sino de la vigencia de un ciclo de desacato y asedio social a las figuras dominantes del ordenamiento político (Ramírez, 2005). “Dicho diferendo ha estado en la base de las líneas de cambio político a lo largo de la última década”.

En efecto, durante este período se produce una “democratización de la democracia” en la medida en que nuevos movimientos y actores sociales ensayan una expansión de la esfera pública desde la cual pasan a disputar a los políticos el monopolio de las funciones de agregación de intereses y de representación mientras –habría que agregar– incrementan su dinamismo en las arenas extraparlamentarias¹³. La movilización indígena y la creación en 1995 del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PK) –brazo electoral del MIE– “supusieron así el desplazamiento de los partidos tradicionales de las administraciones locales, en zonas de predominio étnico, y abrieron paso a novedosas formas participativas de gestión del poder local” (Quinteros & Sylva, 2010, p.10-11).

La tensión entre partidos y nuevos actores sociales colocó, progresivamente, a las propias reglas del juego democrático en el centro de la contienda política: en una década se realizaron, en efecto, dos Asambleas Constituyentes activamente promovidas por movimientos sociales, fuerzas de izquierdas y el conjunto del campo popular.

¹³ Andrade, Pablo 2005 “¿Populismos renovados? Ecuador y Venezuela en perspectiva comparada” en Andrade, Pablo (ed.) *Constitucionalismo autoritario: los regímenes contemporáneos en la Región Andina* (Quito: UASB/CEN).

Para Ramírez (2005), la sucesiva reconfiguración de la comunidad política evidenciaba los problemas de partidos y élites dominantes para retener el control global de las instituciones políticas. “Aun así, una coalición derechista dominó la Convención de 1998”. Se consagraron, entonces, constitucionalmente el modelo privatista y la agenda neo-liberal. En medio de una débil representación de las izquierdas, los principales movimientos sociales reivindicaron como sus conquistas la extensión de los derechos sociales, el reconocimiento de los derechos colectivos y la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana. (p.78)

No obstante, paulatinamente estos primeros enemigos han ido dejando las primeras filas del escenario, y su lugar ha sido ocupado por otros actores, adversarios y enemigos que en las primeras épocas no eran el centro de su atención, aunque no por ello los tenía olvidados: los movimientos sociales (Unda, 2011). Recordemos que las primeras protestas populares de importancia (los conflictos alrededor de la minería –desde junio de 2007–) “habían sido respondidas con una represión desmedida, con militarización y acusaciones de terrorismo y sabotaje”. Luego vinieron otros conflictos: con organizaciones ambientalistas, con los maestros, con los indígenas, con los trabajadores públicos, recuerda (Unda, 2011, p.22).

Y la línea represiva se ha profundizado a medida que los movimientos populares iban siendo convertidos en el enemigo principal. Cada vez más el “ecologismo infantil”, el “indigenismo infantil” o el “etnicismo infantil”, el “izquierdismo infantil”, los “sindicatos corruptos” o las “élites laborales” que “abusan de los recursos públicos” acaparan la andanada de ataques verbales del Presidente Rafael Correa y su empeño por enjuiciar a quienes protestan en las calles, cuestiona (Unda, 2011, p.90).

Los nuevos enemigos del proyecto correísta son los movimientos sociales y los sectores que en los últimos años se han mostrado más organizados, con mayor capacidad de movilización autónoma y, en cierto sentido, con mayor capacidad propositiva hacia el conjunto de la sociedad: el movimiento indígena (especialmente la CONAIE), las organizaciones ecologistas (sobre todo aquellas más vinculadas al movimiento indígena), la Unión Nacional de Educadores, los sindicatos públicos (especialmente los trabajadores petroleros); aquellos, en fin, que encabezaron la resistencia al neoliberalismo, según Unda (2011).

De su parte, Ramírez (2005) señala que de la mano de la popularidad del presidente Correa las izquierdas alcanzaron el pleno control de la Convención de 2007-2008. “Aun en medio del declive de la movilización social, la nueva Carta Magna constitucionalizó la salida del neoliberalismo, amplió aun más el espectro de los derechos, consagró la plurinacionalidad del Estado, innovó en materia de derechos ambientales, extendió radicalmente los espacios de participación popular y, sobre todo, llevó más lejos que nunca las demandas por la des-partidización del orden político”. Descontando la ratificación del presidencialismo –que la izquierda combatió diez años atrás–, el predominio de este conjunto de postulados expresaba que el conflicto social y la lucha política que antecedieron a la Convención consiguieron delinear un horizonte de comprensión común –que no una ideología similar– para vivir en, hablar de y actuar sobre órdenes sociales caracterizados por específicos modos de dominación (p.43)

Aun en este contexto, las disputas entre el ejecutivo, la Asamblea y los movimientos sociales no fueron menores. La Constituyente consiguió no obstante integrarlas en su seno generando una fluida dinámica de interlocución y reconocimiento político entre las fuerzas progresistas.

Es, precisamente, la lógica del reconocimiento la que habría entrado en crisis en la transición post-constituyente, en el 2009, explica Ramírez (2005) quien al tiempo afirma que la sobrecarga del poder legislativo, obligado constitucionalmente a aprobar más de once leyes fundamentales en un año, “desincentiva cualquier debate público robusto dentro y fuera de las arenas parlamentarias”.

Por otro, la sólida implantación del liderazgo presidencial, apuntalado en un carrusel de éxitos electorales, acelera las tendencias gubernativas a subestimar el lugar de la acción colectiva autónoma en el proceso democrático. “Los espacios de interpelación política entre las organizaciones sociales y el bloque en el poder tienden, así, a jugar un rol periférico en el tránsito institucional ecuatoriano. Ello ha redundado, más allá de la política redistributiva del régimen, en escenarios de confrontación que fragmentan el campo progresista y abren interrogantes sobre la consistencia del proceso de cambio que lidera Rafael Correa”. La emergencia de nuevos terrenos de movilización –la conflictividad ambiental– anuncia, a su vez, el sentido de alguna de las contradicciones centrales de la ruta post-neoliberal (Ramírez, 2005, p.80).

No obstante, el triunfo del Presidente Correa y de su movimiento Alianza PAIS- en los sucesivos comicios desde la segunda vuelta electoral de fines de 2006- “produjeron el encumbramiento de una nueva élite política que, a nombre del pueblo”, venía a reemplazar a la antigua élite que había crecido, se había afirmado –y había sucumbido– al fragor de la implementación del modelo neoliberal”. Un doble reemplazo, pues, por un lado, desplazaba a los antiguos “representantes” y, por otro lado, desplazaba también, y en el mismo movimiento, a los propios representados, a los que luego pugnaría por cerrarles los espacios de auto representación (Unda, 2011)

Ramírez (2005) considera que la Constitución del 2008 escarba en las trayectorias de la acción colectiva democrática a lo largo de la última década a la luz de los factores del proceso político que, en el presente, “han determinado un declive de su visibilidad e influencia en la disputa por el cambio y una cierta transformación de sus agendas de lucha”.

2.1 MARCO TEÓRICO

Es necesario conocer varios conceptos de las siguientes palabras: movimiento social, actos social/político, gobernabilidad y violencia; con las cuales se permitirá desarrollar las hipótesis planteadas para lograr concebir la dinámica de los movimientos sociales y políticos, durante los acontecimientos del 30 de septiembre en Ecuador.

2.1.2 Movimiento social

Los movimientos sociales son organizaciones sociales globales formados por diferentes grupos de interés. Los movimientos sociales incluirán a las capas más significativas de la sociedad, como obreros, grupos de mujeres, estudiantes, jóvenes y al estamento intelectual, menciona Tilly (2008).

Para Touraine (1997) un movimiento social es no estar orientado por valores conscientemente expresados, sino que se constituyen en un campo de conflicto que para el autor es la libertad, “en el sentido de que ésta situación permite la constitución del sujeto y se consagra como valor supremo para tal fin”. Además, asegura que los movimientos sociales promueven el respeto, la valorización de los derechos de la vida y no los derechos políticos. “Es como si se pudiese establecer una separación entre los derechos individuales de los sujetos viviendo en sociedad, la política y las condiciones materiales de existencia”, (p.117).

Las características centrales de estos movimientos sociales es que cuestionan las orientaciones centrales de la sociedad, porque ya no está más al servicio de ningún partido político, ni de demandas intelectuales o de grandes ideologías. De acuerdo a Touraine, los movimientos sociales defienden los derechos de libertad y de igualdad. “Confronta al mercado y a su lógica y la clausura del cooperativismo, como modelo de opresión y de restricción de las libertades individuales, como autoritarismo que viene de afuera o como producto a de las grandes ideologías”.

De su parte, Jiménez (2015) considera que un movimiento social es un actor social que se constituye en actores individuales o colectivos; se reconocen como parte del movimiento en tanto actúan con el mismo objetivo (...) Los movimientos sociales, en la actualidad, se caracterizan por su diversidad, sin capacidad de reconstituir un movimiento social central. “Además podemos observar la creciente importancia de diversos movimientos que basan su fuerza en identidades adscritas (mujeres, minorías sexuales, grupos indígenas, etc.). Se dan movimientos sociales, pero no un movimiento que estructure en general a la sociedad (p.50)

En un concepto similar, Castells (1999) plantea que un movimiento social son aquellas acciones colectivas cuyo impacto, tanto en caso de victoria o derrota, “transforma los valores y las instituciones de la sociedad”. Por lo tanto, para el autor no existen movimientos sociales buenos ni malos; progresistas o regresivos, pues “estos reflejan los síntomas de quienes somos, hacia donde vamos y los cambios que debemos tomar para lograr nuestra transformación” (p.27)

Santos (2010) señala que (...) los movimientos sociales tienen que ser totalmente autónomos porque la alternativa es cooptación, que significa la destrucción del movimiento; tienen la idea de que no es posible la relación entre partidos y movimientos. Pero entonces no es posible una articulación entre democracia representativa y participativa, porque la representativa está dominada por los partidos, y la participativa está dominada por los movimientos sociales y las asociaciones barriales, de vecinos, etc. Si no hay una articulación política entre las dos no es posible una articulación entre democracia representativa y participativa (p,67)

Además, el autor considera que los movimientos sociales saben que muchas veces las formas de opresión vienen del Estado, pero vienen también de actores económicos y sociales muy fuertes, por lo que la distinción entre la opresión pública y la opresión privada no es demasiado importante.

Muy similar a lo mencionado por Santos (2010), Foucault considera que solo existe un sujeto social cuando busca confrontar el poder establecido, es decir busca transformarlo. “el nuevo poder se constituye en la confrontación de acciones que obligan a uno de los actores a retroceder y dejar espacio al otro”.

Por su parte, Carrillo (2003) cree que los movimientos sociales se constituyen también a partir de exigencias materiales y exigencias de participación política expresadas en el campo de las relaciones sociales que, a su vez, redefinen estos espacios. “Los movimientos sociales buscan mostrar que sus luchas están conformadas por gente pobre y marginal y su principal objetivo es la lucha por instituir un nuevo tipo de derechos con dignidad y una nueva forma de entender la ciudadanía, a partir de este proceso construyen o entretejen el nuevo sentido de lo cultural y la política”.

Y, agrega que: “para los movimientos sociales la construcción de identidades nuevas y de resistencia es necesaria en la lucha política para transformar la sociedad. Los movimientos de jóvenes, organizaciones indígenas y de mujeres ponen en acción fuerzas culturales en su accionar contra los sectores dominantes. Estos actores populares se movilizan colectivamente a partir de conjuntos muy diferentes de significados e intereses, pero, logran cohesionarlos en una propuesta política colectiva”. (p.18)

Hay que reconocer a los movimientos sociales como actores colectivos y con capacidad de movilización, dice (Melucci, 1995, p.38-56), quien asegura que se integran a “una reinterpretación simbólica y a partir de este elemento sus acciones se enmarcan en una nueva perspectiva política”. El autor reconoce a los movimientos sociales cuando tienen ciertas características: primero, cuando se trata de una forma de acción colectiva que implica la existencia de la solidaridad entre sus componentes; segundo, cuando está implicado en el conflicto y de ésta manera está en oposición a un adversario; y finalmente, cuando sus objetivos rompen los límites.

2.1.2. Actor social/ político

Cuando hablamos de un actor social estamos hablando de algo que es distinto de cualquier organización, según explica Jiménez (2015), por ejemplo, el movimiento sindical no es el sindicato, pero tampoco es la federación de sindicatos, ya que un movimiento podrá tener intereses, creencias o valores; sin embargo, lo que no tiene son decisiones como las tiene una organización.

Para Jiménez (2015), un actor social no tiene capacidad para elegir una acción y hacer esa acción exigible a sus miembros. “No tiene capacidad vinculante. Por lo tanto, una organización es casi formalmente equivalente a un individuo” (p.90)

Touraine (1997) comparte lo planteado por Jiménez y señala que un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. Además, menciona que el concepto de actor social puede ser entendido como “un grupo de intervención, tal que percibe a sus miembros como productores de su historia, para la transformación de su situación; o sea que el actor social actúa sobre el exterior, pero también sobre sí mismo”.

En ambos casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, entre el individuo y el Estado. En dicho sentido es generador de estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a la gestión y transformación de la sociedad (Touraine, 1997, p.120). Y es que, para el autor, el individuo es aquel que sigue atado a cualquier tipo de dominación externa, mientras que sujeto es el individuo que trasciende dicha influencia sin negar su situación social, pero transformándola de manera activa al conjugar roles sociales y vida personal. En este sentido, actor va ligado a sujeto.

Hay que entender que el actor es el sujeto que transforma tanto su entorno físico como social a través de su acción, por eso para Touraine (1997) el sujeto es movimiento social. En Touraine, la acción del sujeto se presenta como un movimiento constante, como una tensión continua frente a cualquier tipo de poder externo, la acción es resistencia y lucha, un movimiento continuo. Por lo tanto, el autor concluye que ese actor- sujeto es movimiento social (p.223-226)

Según Scharpf (1997), el concepto de actor debe tener un factor fundamental y es tener cierta capacidad de actuación estratégica. Ello implica, en el caso de los actores colectivos, que los individuos que los integran pretendan desarrollar una acción conjunta o lograr un objetivo común. “Se requiere entonces que tengan mapas cognitivos (en el sentido de preferencias, visiones e interpretaciones del mundo) si no comunes, sí al menos convergentes (dimensión cognitiva de la capacidad).

Además, considera que es imprescindible que sus miembros sean capaces de agregar sus preferencias a través de algún mecanismo para la resolución de conflictos internos, es

decir “que algunos de ellos estén dispuestos a ceder en sus posiciones a cambio de lograr un beneficio común (dimensión "evaluativa" de la capacidad)” (p.34).

Para Jiménez, un sujeto no representa a los individuos como lo hace una organización a través de pertenecer a una organización que formalmente tiene entre sus funciones representar. Considera que el sujeto lo hace a través de un reconocimiento común, es decir “el movimiento lo forman aquellos que trabajan en pos de algún objetivo determinado”.

De su parte, Coole (2005) propone una definición de "agnosticismo ontológico" al insistir en la necesidad de identificar cuál es el abanico de capacidades o propiedades que tiene un actor, más que en la de proporcionar una definición clara y precisa del concepto. De acuerdo a la autora, “un actor tiene los medios y la capacidad para decidir y/o actuar intencionada y estratégicamente para la consecución de un objetivo común como unidad suficientemente cohesionada, lo que le identifica y diferencia frente al resto y que, por tanto, se le puede atribuir alguna responsabilidad por sus decisiones y/o actuaciones. En otras palabras, un actor es una unidad de decisión–acción responsable”.

Mouffe (2014) para exponer un concepto de actor, plantea dos enfoques. Uno de estos, el modelo agregativo: considera que los actores políticos se mueven impulsados por la persecución de sus intereses. El otro modelo, el deliberativo, destaca el papel de la razón y de las consideraciones morales. “Lo que ambos modelos pasan por alto es la importancia de las identidades colectivas y el papel central que juegan los afectos en su constitución”.

Es decir que para Mouffe (2014) resulta imposible comprender la política democrática sin reconocer a las “pasiones” como la fuerza motriz en el ámbito político. “El modelo agonista de democracia aspira a abordar todos los temas que los otros dos modelos no pueden tratar de manera apropiada debido a sus marcos racionalista e individualista” (p.20-35)

Sibeon (1999) explica que un actor es aquella entidad que dispone de los medios para decidir y actuar conforme a sus decisiones, cuyas características (denominadas "propiedades emergentes") son cualitativamente distintas a las de la suma de las

decisiones de los individuos que la integran y a la cual se le puede atribuir responsabilidad por los resultados de sus acciones. Para el autor, "aparte de los actores individuales y de los actores sociales organizativos tales como los partidos políticos, los comités, los ministerios, las empresas privadas, las asociaciones profesionales, los grupos de presión organizados y similares, no hay otros actores".

Scharpf (1997), también, expone el concepto de actor desde la perspectiva del "institucionalismo, entiende que los actores quedan básicamente caracterizados por sus orientaciones percepciones y preferencias y sus capacidades. Y, el autor, lo clasifica de esta manera:

- **La unidad de referencia.** Con frecuencia, los individuos no actúan en su propio nombre sino en el de otras unidades más complejas (como la familia, la empresa en la que trabajan, el sindicato o el partido político al que están afiliados) con las cuales se identifica y desde cuya perspectiva se explica su actuación. La unidad de referencia de un individuo puede ser deducida a partir del *rol* que éste represente en un determinado entorno.
- **Las preferencias del actor:** Tienen que ver con lo que es su propio "interés" (consistente en preservar su autonomía y asegurar su supervivencia y crecimiento), sus "normas" (entendidas como patrones y criterios de conducta) y con su "identidad" (el conjunto de normas e intereses propios a partir de los cuales le identifican otros actores).
- **Las orientaciones cognitivas:** Se refieren a la percepción que el sujeto tiene de los "cursos de acción" por los que puede optar, de los resultados de dichos cursos de acción y del impacto que éstos tendrían en sus preferencias. El actor, cuya racionalidad es limitada, ni siquiera está en condiciones de conocer todos y cada uno de sus posibles "cursos de acción".

A modo de conclusión, Mouffe (2014) entiende a los actores sociales como el establecimiento de un orden que organiza la coexistencia humana en condiciones que son siempre conflictivas pues están atravesadas por lo político (dimensión del antagonismo y de hostilidad que existe en las relaciones humanas). "Antagonismos que expresan la diversidad de las relaciones humanas y a todas las relaciones sociales del país, en su discurso se presentan como actores hegemónicos y podríamos decir, que son el principal grupo político de la sociedad".

2.1.3. Gobernabilidad

Para Flisfisch (1989), la definición de gobernabilidad se refiere a la calidad del desempeño gubernamental a través del tiempo, ya sea que se trate de un gobierno o administración o de varios sucesos. El autor explica que estos sucesos se expresan a través de un conjunto de dimensiones: capacidad gubernamental de adoptar oportunamente decisiones; la efectividad de esas decisiones, entendida como la aptitud para producir respuestas sociales; la aceptación social de las decisiones frente a temas concretos; la eficiencia de las decisiones, en términos de producir efectos que realmente alteren la situación existente; la eficiencia de las decisiones, de acuerdo a las matrices culturales predominantes; y finalmente, la coherencia de las decisiones a través del tiempo (p.114)

Por su parte, Pachano (1997) el concepto de gobernabilidad, en el imaginario de la mayoría de la población, se reduce a una forma de acceso a los distintos niveles de gobierno, y solo en menor medida a la vigencia de derechos y garantías. “Por consiguiente, la democracia no se constituye, como se ha visto antes, en el ámbito de procesamiento de los conflictos sociales, pero tampoco aparece como el espacio de creación y ejercicio de la ciudadanía. De esta manera, la democracia pasa a ser un instrumento, hasta cierto punto, inútil para muchos y prescindible para la mayoría” (p.72)

Otro concepto maneja Muñoz (1997), quien concibe a la gobernabilidad como la cualidad propia de una comunidad política, según la cual sus intenciones de gobierno actúan eficazmente dentro de un espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. Además, basándose en este concepto Muñoz (1997) considera que el concepto de gobernabilidad pone el acento en la capacidad de los gobiernos para administrar eficazmente la economía, “en el marco de los sistemas políticos en crisis para controlar y manipular los conflictos sociales y resolver las incoherencias institucionales que surgen como resultado de los ajustes económicos, que se dan en la región, en las décadas de los 80 y 90 conducidos por la política neoliberal”.

Camou (2001) explica a la gobernanza como “la acción y el efecto de gobernar y gobernarse”, mientras que la gobernabilidad indagaba acerca de cómo se gobierna, prestando atención a la estabilidad política. Los problemas no se derivaban sino de aspectos deficitarios o debilidades de las instituciones de la democracia, aparte de los

consabidos resabios autoritarios que atentan contra el fortalecimiento de una cultura cívica o la debilidad de las bases económicas y sociales de la democracia que impiden la plena vigencia de derechos ciudadanos” .

Prats (2001) define la gobernabilidad como “un atributo de las sociedades que se han estructurado sociopolíticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones de autoridad y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales e informales (...) dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias”. Es decir, para este autor, la gobernabilidad es postulada como una cualidad de las sociedades o sistemas sociales, no de sus gobiernos, pues “son los sistemas sociales los que son (y en determinada medida) gobernables cuando se da esa estructuración sociopolítica”.

2.1.4. Violencia

“Se podría decir que en la mayoría de los casos se señala el uso extensivo de la palabra violencia, no sólo para constatar que con ella se nombran fenómenos muy diferentes sino, sobre todo, para explicar la dificultad de su conceptualización. A mi juicio, en los mejores análisis se hace un llamado a la historia para recordar que la violencia es “tan vieja como el mundo” y cuestionar, de paso, ideas bastante extendidas (en los medios de comunicación y en la opinión pública): las sociedades contemporáneas han sido las más violentas”, (Blair, 2009, 256).

Según Hannah Arendt (2005), “la verdadera sustancia de la acción violenta es regida por la categoría medios-fin cuya principal característica, aplicada a los asuntos humanos, ha sido siempre la de que el fin está siempre en peligro de verse superado por los medios a los que justifica y que son necesarios para alcanzarlo”.

“La violencia puede ser justificable pero nunca será legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuanto más se aleja en el futuro el fin propuesto. Nadie discute el uso de la violencia en defensa propia porque el peligro no sólo resulta claro, sino que es actual y el fin que justifica los medios es inmediato” (p.17-20)

Por lo contrario, Engels (1878) contrapone a Arendt (2005) y sostiene que la violencia desempeña un papel en la historia, un papel revolucionario (...) “de la cual los

movimientos sociales se imponen y rompen formas enrigidecidas y muertas”.

Un concepto muy profundo es el que emite Weber, quién considera que “la violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado se vale, pero sí es su medio específico. Hoy, precisamente, la relación del Estado con la violencia es especialmente íntima. En el pasado las más diversas asociaciones (...) han utilizado la violencia como un medio enteramente normal. Hoy, por el contrario, tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia físico legítima”.

Para Pecaute (2003), el término "violencia" ha tenido una amplia difusión ya que parece dar cuenta de mejor manera de la multiplicidad de los protagonistas, de la mezcla de componentes que están presentes en él, de la importancia de los fenómenos urbanos que parecen ampliamente independientes de los demás aspectos.

Y, es que se cree que, la violencia se ha convertido en un intento de funcionamiento de la sociedad dando nacimiento a diversas redes de influencia sobre la población y a regulaciones oficiosas, no es una realidad provisoria ya que todo sugiere que ha creado una situación durable; y aparece como una sucesión de configuraciones complejas e inestables (Pecaute, 1996, p.116).

Por su parte, Alain Michaud (1978), en el texto de Elsa Blair, “el concepto de violencia ha servido durante veinte años para aprehender ese desorden vg., ese caos de los fenómenos políticos. Su uso sin discriminación reenviaba, al mismo tiempo, al desorden de los pensamientos y de las conceptualizaciones frente a ese desorden. Hay violencia cuando nadie sabe a qué atenerse, cuando nadie puede contar con nada, cuando todo puede pasar, cuando se deshacen las reglas que hacen previsible los comportamientos y las expectativas de reciprocidad dentro de las interacciones. Ella ha existido a todo lo largo de la historia; lo que se ha modificado, desde el siglo XIX, es la escala y la eficacia de la gestión de la violencia” (p. 223)

A modo de conclusión, los actores políticos y sociales están estimulados a encontrar nuevas hojas de ruta y estrategias para lograr resultados de acuerdo a sus objetivos, sean estas por acciones violentas o marchas pacíficas. Estas ideas políticas tratan de sacar ventaja del escenario de cambio político y de la posible apertura de nuevas oportunidades

institucionales, como es el caso de la fracción nebotista del Partido Social Cristiano (PSC) o de la caduca agenda del partido del Coronel y ex presidente de la República, Lucio Gutiérrez. Incluso existió una ruptura, desde el 2006, en el escenario político ecuatoriano desde la aparición del movimiento Alianza PAIS, del presidente de República Rafael Correa, ya que por 10 años el Ecuador mantuvo un gobierno progresista, con el cual el país mantuvo una estabilidad democrática, después de los continuos golpes de Estado.

CAPÍTULO 3

3. UNA MIRADA A LOS HECHOS:

3.1. Los movimientos sociales y políticos, antes del 30-S: ¿Conspiración o acción sorpresiva?

Críticos y opositores al gobierno del Presidente Rafael Correa llamaron al acontecimiento del 30 de septiembre de 2010 un auto-secuestro o show mediático, todo con la finalidad- según dicen- de evitar un derrocamiento que “el pueblo de Quito y el país entero anhelaba, propio de la sociedad ecuatoriana”, con más de 3 presidentes destituidos en ocho años: Ecuador, el país ingobernable” (Ramírez, 2010).

Pero al parecer esto era una cortina de humo, pues la nueva derecha conformada por el partido Sociedad Patriótica (PSP), liderada por el derrocado ex presidente Lucio Gutiérrez y grupos de la ultra derecha como el partido Social Cristiano (su líder el fallecido ex presidente León Febres Cordero (1984-1988) acusado de ser un gobierno represivo que atentó contra los derechos humanos) y Madera de Guerrero¹⁴, quienes desde el 2009 trataban de tener acercamientos con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Movimiento Popular Democrático (MPD) y el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador.

De la mano de la popularidad del presidente Correa, las izquierdas alcanzaron el pleno control de la Convención de 2007-2008. Aun en medio del declive de la movilización social, la nueva Carta Magna constitucionalizó la salida del neoliberalismo, amplió aun más el espectro de los derechos, consagró la plurinacionalidad del Estado, innovó en

¹⁴ El Movimiento Cívico Madera de Guerrero (MDG) es un partido conservador de la ciudad de Guayaquil en Ecuador creado por el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot. Su programa está centrado en la autonomía regional. Madera de Guerrero está en alianza con el Partido Social Cristiano. Jaime Nebot creó el Movimiento Cívico Madera de Guerrero antes de las elecciones parlamentarias del 2009, para mejorar sus oportunidades de reelección como alcalde. MGD y PSC entraron en coalición a las elecciones parlamentarias del 2009 bajo una misma lista, obteniendo 11 curules. Medio año después de las elecciones se rompió la alianza entre estos dos partidos políticos. Desde las elecciones de 2013, retomaron- nuevamente- su alianza.

materia de derechos ambientales, extendió radicalmente los espacios de participación popular y, sobre todo, llevó más lejos que nunca las demandas por la despartidización del orden político, según Paz y Miño (2010); “así descontando la ratificación del presidencialismo –que la izquierda combatió diez años atrás–, el predominio de este conjunto de postulados expresaba que el conflicto social y la lucha política que antecedieron a la Convención consiguieron delinear un horizonte de comprensión común –que no una ideología similar– para vivir en, hablar de y actuar sobre órdenes sociales caracterizados por específicos modos de dominación. Aun en este contexto, las disputas entre el ejecutivo, la Asamblea y los movimientos sociales no fueron menores. La Constituyente consiguió, no obstante, integrarlas en su seno generando una fluida dinámica de interlocución y reconocimiento político entre las fuerzas progresistas”.

¿Cómo actuaron los movimientos políticos y sociales del Ecuador el 30-S? Uno de los acontecimientos que desencadenaron los sucesos del 30-S empezó por lo ocurrido en Macas, capital de la provincia de Morona Santiago, el 30 de septiembre de 2009, muere el profesor shuara Bosco Wizuma en el marco de la movilización de la Conaie a causa de perdigones disparados inadvertidamente, de acuerdo a las investigaciones forenses, por un miembro de su propia comunidad, “muerte en torno a la cual la Conaie, Pachakutik y el MPD articularon un discurso de oposición, caracterizando al gobierno como autoritario y fascista, al acusarle de la muerte del docente. Todo esto orquestado por los grandes medios de comunicación privados” (...) (Sylva & Quintero 2011, p. 24).

Para Sylva et al. (2011), ese conjunto de acontecimientos rubricaron la política de “distanciamiento” creciente de varias organizaciones, sectores de intelectuales y de movimientos sociales respecto al gobierno de la Revolución Ciudadana, planteada por el Movimiento Patria Altiva y Soberana (PAIS)¹⁵, incluyendo el alejamiento de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), un aliado del gobierno que, a mediados de año, se sumó también a esa política, “influyendo cual juego de dominó en un grupo de asambleístas del Partido Socialista-Frente Amplio (PSFA)”.

Es decir, la coyuntura se abría con una crisis de legitimación del Régimen, porque de su

¹⁵ Alianza País (AP) oficialmente Movimiento Alianza PAIS - Patria Altiva y Soberana es el nombre del movimiento político ecuatoriano que sirve como organización política a la Revolución Ciudadana impulsada por el presidente Rafael Correa. La organización política fue lanzada formalmente en Quito el 19 de febrero de 2006 con un "festival cívico" que sus organizadores definieron como el "semillero de la nueva patria". Fue oficializada por el antiguo Tribunal Supremo Electoral el 3 de abril de 2006, otorgándole la lista 35.

alianza original de apoyo se desgajaban fuerzas identificadas con la izquierda que el gobierno decía representar, especialmente el emblemático movimiento indígena encarnado en la Conaie y la Fenocin, entre otras organizaciones. “Dado que el gobierno del Presidente Rafael Correa no se sustenta en una alianza orgánica de clase, sino en una alianza multclasista inorgánica, es decir, sin una base y hegemonía de clase definida, la oposición de la Conaie, Pachakutik y el MPD, y el distanciamiento potencial de la Fenocin y el PS-FA, que movilizan a sectores medios y populares definidos, constituyó un debilitamiento conspicuo de la base de sustentación del gobierno, y, por ende, de su proyecto de reforma económica, social y política” (Sylva & Quintero 2011).

Ramírez (2010), en una publicación realizada para el diario *Le Monde Diplomatique*, asegura que desde el primer día del mandato de Rafael Correa “la derecha había trazado una nítida línea de oposición al programa pos-neoliberal de Correa, desde inicios de 2009 la Revolución Ciudadana ha debido enfrentar además los embates de algunas de las fuerzas políticas y sociales situadas en el arco progresista”.

Recuerda así, que la confrontación entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha superado los umbrales de tensión política previstos, según Ramírez, ya que dicha conflictividad estrechó la base de legitimidad del gobierno y redujo las posibilidades de influencia política de los movimientos sociales. Lo que para Correa era una lucha en una sola voz, es decir establecer una suma de poderes contra el neoliberalismo en Ecuador, en una lucha común entre las organizaciones de izquierda, contra la “partidocracia” se desvaneció pues la separación de los movimientos indígenas y otras organizaciones marcó una ruptura significativa y se establecería en “las nuevas fronteras políticas” del país (Ramírez, 2010, p.28).

Una teoría similar maneja Ospina (2011), quien considera que entre las organizaciones sociales y el gobierno existe, pues, un distanciamiento político que no puede reducirse a la influencia del Departamento de Estado de Estados Unidos. “Hay que decir, además, que este distanciamiento no se limita al corporativismo sino también a la política de promoción de la minería y a la hostilidad gubernamental frente a la movilización social independiente, que lo ha llevado a acusar de «terrorismo y sabotaje a una gran cantidad de dirigentes sociales, incluida toda la dirigencia de la Conaie y el Ecuarrunari”.

Esta ruptura, explicada anteriormente, entre los movimientos políticos y sociales se fortalecieron en medio de un debate de 14 proyectos de leyes, la influencia ideológica de una elite empresarial, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) financiadas y predominadas por los grupos hegemónicos y otros movimientos sociales como el sindical, insistiendo en sus desacuerdos con el gobierno. Un ejemplo de ello, información que recogen los medios de comunicación, fue la marcha del 1 de mayo del 2010, cuando el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ya no acompañó oficialmente al desfile del gobierno por el Día Internacional del Trabajo en Quito, marcando la distancia de los gremios del proyecto político.

Según investigaciones de Golinger, 2010, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) "han estado realizando un trabajo meticuloso con sectores indígenas en Ecuador, penetrando e infiltrando sus movimientos para promover una agenda anti-Correa"

El Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la Usaid en Ecuador a más de \$38 millones de dólares solo en 2010. En los últimos años, un total de \$5,6 millones de dólares fueron destinados para trabajo de "descentralización" en el país (Golinger, 2010).

Recordemos que uno de los principales ejecutores de los programas de la Usaid en Ecuador es la misma empresa que opera con la derecha en Bolivia: Chemonics, Inc., que financió a los sectores separatistas en el país andino e incluso, aquellos que intentaron ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en 2008.

Contrariamente, (Ospina, 2010, p.68) menciona que el aporte de Usaid y el *National Endowment for Democracy* se dirigió al Comité Empresarial Indígena, donde no solo figura como promotora Lourdes Tibán, asambleísta de Pachakutik, fuerte opositora del gobierno, sino también Mariano Curicama, prefecto indígena de Chimborazo, aliado del gobierno. Si la razón de sus posiciones políticas es el origen de sus fondos, ¿por qué sus miembros tienen posiciones diferentes? En realidad, estas instituciones no han financiado ni a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ni al Ecuarrunari ni a Pachakutik.

“Todo aquel que conozca mínimamente el movimiento indígena ecuatoriano sabe que la financiación de la cooperación internacional existe desde el mismo nacimiento de las organizaciones étnicas a inicios de los años 80. La lógica del razonamiento nos llevaría a pensar, entonces, que el levantamiento de 1990 y toda la oposición al neoliberalismo podría ser una acción paralela de aparatos paraestatales del extranjero. Sustituir explicaciones políticas por acusaciones de conspiración está lejos de ayudar a entender el proceso histórico”.

Y es que el corporativismo ha sido un rasgo típico del sistema político ecuatoriano a lo largo del siglo XX. Constituye un mecanismo de representación de los intereses económicos de los grupos sociales organizados caracterizado por: a) suplantarlo, o al menos, hacer prevalecer la esfera de los intereses privados por encima de los intereses públicos o colectivos, lo que significa negar la democracia general del pueblo como posibilidad histórica; b) expandir/conservar las “conquistas” gremiales de sus “grupos de interés” ya obtenidas, conceptuadas como derecho irrenunciable; c) eludir el reconocimiento de los derechos y obligaciones de cada ciudadano como una condición universal (de todos), por encima de sus intereses, logros y conquistas gremiales; d) hacer prevalecer la representación de los gremios, sindicatos y corporaciones en general, por encima de los partidos (Sylva & Quintero, 2010, p.56).

Igualmente, Ramírez Gallegos (2010) enfatiza que una cierta voluntad gubernamental de des-corporativizar el Estado ha dejado a la luz el peso de los intereses representados dentro de las instituciones públicas. Para unos (diplomáticos, exportadores, banqueros, docentes, policías) se trata apenas de resguardar beneficios y bolsones de excepcionalidad institucional específicos. Para otros (indígenas, sectores medios y populares sindicalizados, militares) en la preservación de los espacios de representación conquistados en la administración pública se juega, además, parte de su autonomía política. Correa, apoyado en la legitimidad de las urnas, los ve como una pura constelación particularista poco dispuesta a inmiscuirse en la construcción del bien común y de una “cultura política de la generalidad”.

Los actores sociales han dado pocas señales en sentido contrario. En medio de un vertiginoso ciclo de reformas han tendido a replegarse sobre sí mismos, a reforzar sus agendas parciales y a abandonar el terreno de la sociedad civil como espacio de lucha política; el control de la institucionalidad es atractivo, sobre todo, para las elites

dirigentes.

La disputa por el lugar del corporativismo en las izquierdas viene de larga data. Hoy, cuando una de sus expresiones se encuentra en el poder, esa disputa puede paralizar el proceso de transformación democrática del Estado abierto a partir de la Asamblea Constituyente. “Se buscó así delimitar la especificidad funcional de la banca y reducir la convergencia entre poder económico e influencia política que tanto gravitó a su favor en los decenios anteriores. En medio de inmensas presiones sobre las agencias reguladoras, la banca ha debido acatar la norma: la vigente autonomía relativa del poder político y del Estado respecto al núcleo duro del neoliberalismo ofreció la ocasión para concretar dicha medida” (Ramírez Gallegos, 2010).

La tensión y beligerancia entre Correa y, sobre todo, las organizaciones indígenas, se mantuvo constante. Los primeros embates se dieron, en enero de 2009, luego de que sectores indígenas y ambientalistas anunciaran su resistencia a la minería y acusaran al gobierno de neoliberal. Correa respondió violentamente. Habló de los peligros que representa el “izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil” para el proyecto nacional de cambio político. En adelante, la estrategia gubernamental pareció reorientar la polarización hacia la dirigencia indígena (Ramírez Gallegos, 2010, p.87).

Posteriormente, meses antes del 30-S, existió una reunión entre la dirigencia de La Conaie con la Junta Cívica de Guayaquil en marzo del 2010, que evidenciaba el acercamiento de una organización que había sido la fuerza hegemónica de la izquierda en los años 1990, con el núcleo duro, orgánico, de una conspiración en ciernes denunciada por el Presidente Correa en enero del 2010, reunión que no sorprende cuando altos dirigentes indígenas (como Lourdes Tibán, alto dirigente de la Conaie), pertenecen a organizaciones financiadas por organismos estadounidenses creadas para promover la desestabilización de los gobiernos de izquierda latinoamericanos (El Ciudadano, octubre 2010)

Ortiz (2010) realiza una breve retrospectiva de los acontecimientos que concluyeron en el 30-s. Analicemos estos tres componentes: el malestar de los empleados de varios ministerios y de los cuarteles policiales tuvo como detonante la aprobación, en la Asamblea Nacional, de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Dicha ley busca homogenizar las reglas de juego de la burocracia civil y militar, lo que generó la reacción de los empleados públicos, al punto que se convocaron reuniones gremiales y se intentó

paralizar varios ministerios, con el fin de exigir la no aprobación de la mencionada ley y la salida de Rafael Correa.

También explica como algunos dirigentes indígenas apoyaron esta plataforma, aunque sin el respaldo de la principal organización indígena, la Conaie, que se pronunció a medio día del 30 en defensa de la Constitución. Sin embargo, en los meses previos el malestar se había extendido a los sectores afectados por las cerca de treinta leyes aprobadas por el parlamento. Por ejemplo, las universidades se sintieron perjudicadas por la Ley de Educación Superior; los campesinos y ecologistas por la Ley Minera; los indígenas por la Ley de Aguas; y, finalmente, los servidores públicos y la Policía por la Ley de Servicio Público. Hay que recordar que algunos de estos sectores respaldaron las propuestas de Alianza País en la primera fase de la Revolución Ciudadana –durante la Asamblea Constituyente–, pero se fueron distanciando al no lograr que sus propuestas sean incluidas en la nueva normativa.

Hay dos problemas en este pool de normativas producidas por el gobierno: el primero, las leyes se han tramitado sin mayor debate, aprovechando la mayoría con que cuenta Alianza País, movimiento político del Presidente Correa. Son leyes impuestas por el ejecutivo sin respetar la independencia del legislativo, a un ritmo acelerado, sin el debido tratamiento de las diferencias que existen en la vida política, lo cual enajena el apoyo de sectores que podrían coincidir en varios de los temas en debate, después de socializarlas. El segundo problema tiene que ver con su contenido: “las leyes están orientadas a fortalecer y modernizar el Estado, homogenizando las reglas de juego para el sector público” (Ortiz, 2010, p.56).

Es decir, lo que el autor señala es que dichas leyes buscan poner organizar las estructuras del Estado. Y, según el discurso oficial, rescatar lo público del corporativismo presente en el Estado. Sin embargo, “esta visión volcada a racionalizar, planificar y conseguir resultados a la brevedad posible se impone sin dar cuenta de las diferencias políticas que existen tanto dentro del bloque legislativo de Alianza PAIS, como en relación a posibles aliados. Esa visión no considera las tensiones que provoca el proceso de modernización en marcha, en una sociedad heterogénea y diversa como la ecuatoriana” (Ortiz, 2010).

Falconí (2010) concluye que el detonante de los sucesos del 30 de septiembre fue el malestar provocado por la Ley de Servicio Público. Es improbable que cualquier tipo de reforma no levante conflictos. De hecho, la Constitución vigente y las reformas legales necesarias para sustentarla han estado marcadas por pugnas. La Ley de Servicio Público no podía ser la excepción. Para racionalizar el servicio público esta ley incluye a militares y policías, y elimina viejas prebendas adquiridas silenciosamente a lo largo de los años. “La inminencia de perderlas fue respondida en forma desmesurada. Ningún malestar justifica la violencia desatada por la reforma, aunque abre un debate legítimo sobre cómo se están conduciendo los cambios institucionales en el país”.

3.2. La dinámica de los actores sociales y políticos durante la revuelta

Según los investigadores consultados, coincidieron en que los movimientos sociales que participaron en las manifestaciones del 30-S, no fueron homogéneos, ya que se considera que los agentes que participaron en la protesta en contra de la Fuerza Pública sublevada, fue muy diversa. Jóvenes estudiantes, amas de casa, servidores públicos, empleados del sector privados y partidarios del movimiento Alianza PAIS rechazaron la actuación de los insubordinados.

Mientras los manifestantes se acercaban a las afueras del Hospital de la Policía, donde se encontraba el Presidente Correa, los assembleístas de derecha, en colaboración con la policía, bloqueó el acceso de los assembleístas de Alianza País al recinto y, aún en medio de la sublevación, planteó la necesidad de amnistiar a los insubordinados. Hacia la izquierda, Pachakutik solicitaba la renuncia del Presidente y llamaba a la movilización, el MPD se alineaba en las calles con los uniformados: sus bases tomaron por asalto la Gobernación de la provincia de Cotopaxi en correspondencia con una lógica de desconocimiento del poder político. Unos y otros responsabilizaban a Correa por la crisis. La Conaie, en medio de un enconado debate interno, se pronunció de modo más cauto contra todo intento golpista mientras enfatizaba sus diferencias con la Revolución Ciudadana (Ramírez Gallegos, 2010, p.41).

Asimismo, otras vocerías se hacían eco en los medios de comunicación pues el ex dirigente preso de la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador) llamó a las universidades a sumarse a la sublevación de policías y militares; el ex presidente

Lucio Gutiérrez pidió la disolución del Parlamento, culpando a Correa como el único responsable de la situación por llevar un gobierno “abusivo, corrupto y prepotente”; el activista y periodista Carlos Vera, quien desde hace semanas encabezaba la recolección de firmas para intentar la revocatoria del mandato de Correa de acuerdo con la Constitución, llamó a que el país se sume a la sublevación de la policía, argumentando que ésta era una “revocatoria de hecho”; Cléver Jiménez, jefe del bloque de Pachakutik, convocó al movimiento indígena, a los movimientos sociales y otras organizaciones, a constituir un “frente nacional” para exigir la salida de Correa; la asambleísta indígena Lourdes Tibán aplaudió la insurrección señalando: “¡Bien señores policías y militares, mil veces bien. ¡Ya era hora de que dejen de ser simple tropas!”. También Nelson Erazo, Presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador asumiendo hablar a nombre de los trabajadores y las Centrales Sindicales del país, expresó su respaldo a la sublevación policial. Dirigentes del Movimiento Popular Democrático, como Luis Villacís, claramente se pronunciaron a favor de los policías y en contra del Presidente Correa.

Por su parte, (Paz y Miño, 2010, p53) asegura que en el 30 de septiembre varios fueron actores “activos”, una serie de personajes ligados a Sociedad Patriótica (SP); los dirigentes y manifestantes del Movimiento Popular Democrático (MPD) y sus grupos aliados (un sector de la FEUE, la UNE y la UGTE); varios dirigentes de Pachakutik, la CONAIE y ciertos sindicatos; un núcleo de activistas políticos “independientes” o ligados a partidos de la oposición; los asambleístas identificados con la misma SP, el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y otros aliados. Entre los actores “pasivos” contó la extrema derecha; sectores del alto empresariado con intereses oligárquicos; el núcleo hegemónico de medios de comunicación privados anticorreístas; “y una más amplia y difusa esfera de clases altas y medias, todos interesados en aprovechar del momento, en que algo pase y, sin duda, con el abierto propósito de que caiga el Presidente”.

Para Falconí (2010), “el intento de golpe de Estado” del 30 de septiembre demuestra que el cambio institucional impulsado por el Gobierno provocó en determinados grupos de la sociedad ecuatoriana resistencias, que pueden expresarse con un grado de violencia suficiente como para truncar el proceso. Y explica: “no confundir el principio de autoridad con autoritarismo. Participación e inclusión son características originarias de la matriz social del gobierno de la Revolución Ciudadana”, (p.67).

Además, señala que la base, el principio y el fin de la acción del Gobierno radican en los movimientos sociales. “Es ineludible no perder la vinculación con éstos, generando una política de alianzas sociales y productivas. El cambio exige construir articulaciones precisas con los diversos actores”. Las alianzas dotan de la potencia y envergadura política necesarias a la voluntad de transformación social. Es imprescindible promover la unidad entre todos quienes apuestan y contribuyen cotidianamente a la transformación del país.

Ospina (2010) explica que, si las demandas contra la Ley de Servicio Público pudieran considerarse justas, la combinación con el rechazo a la reforma policial y la agitación gutierrista hacen de este un motín reaccionario. Las organizaciones populares y progresistas solo podían repudiarlo y combatirlo. Pero no fue así. Aunque la inmediata movilización social en defensa del gobierno fue importante, fue también bastante modesta: nunca hubo ríos de gente en la calle. Es difícil calcular la cantidad de personas que se movilizaron para la defensa del gobierno, pero es seguro que no hubo 100.000, como dice el presidente. “La revista *Opción S* habla de tan solo 2.000 personas en la mañana. En la noche, la Plaza Grande, donde Correa dio su discurso una vez liberado, estaba llena entre un tercio (estimación de la Revista *Vanguardia*) y la mitad, es decir, entre 4.000 y 7.000 personas” (p,130)

Al margen de cálculos incompletos, según Ospina (2010), no se trató de un factor decisivo en la resolución de la crisis. “Las insistentes declaraciones de varios voceros del gobierno sobre la urgencia de contar con bases organizadas llama indirectamente la atención sobre su rol en los momentos decisivos de la crisis”.

Por eso, más decisiva para hacer inviable un golpe fue la popularidad del gobierno en las encuestas. En efecto, todas ellas revelan un masivo repudio a la posibilidad del golpe, a la retención del Presidente y a la actitud de la Policía, que dejó desguarnecidas las ciudades, (p,90).

De su parte, Juan Paz y Miño (2010) dice que el 30 de septiembre del 2010 no hubo una rebelión nacional-popular. El descontento de la tropa policial condujo a un acto de insubordinación en las calles y cuarteles. En todo el país se experimentaron los riesgos para la democracia y para la vida del Presidente Rafael Correa, quien no cedió,

preservando así la dignidad del Ejecutivo y del país. La insurrección despertó una amplia movilización social en su contra y el repudio nacional e internacional.

Sin embargo, al siguiente día de la rebelión policial-militar del 30 de septiembre de 2010, la oposición tenía lista su interpretación: todo es culpa del Presidente Correa, nunca hubo golpe de Estado, jamás existió un intento para matar al Mandatario y el asunto se redujo a la “protesta” policial. Hasta las muertes de aquel día fueron atribuidas a la “prepotencia” del Presidente. Y el inicio de una serie de procesos judiciales sirvió para hablar de “cacería de brujas”, asegura (Paz y Miño, 2010, p.203).

La crisis del 30 de septiembre arrojó algo inédito y totalmente heterogéneo: la movilización ciudadana en apoyo a un Presidente y su proyecto político, casi a los cuatro años de ejercicio del poder, en un país en el que la sociedad se ha movilizó históricamente para “tumbar” presidentes, jamás había ocurrido esto en el Ecuador. Este acontecimiento indica que el gobierno cuenta con un gran apoyo y una participación activa de la ciudadanía, lo que demostró a la oposición que su estrategia “golpista”, no tuvo acogida debido a su bajo apoyo y credibilidad popular.

“El fervor y la decisión con el que el pueblo de Quito fue a rescatar a Correa de manos de sus secuestradores fueron demostrativos de la adhesión de esos sectores al proyecto político de la Revolución Ciudadana”. (Sylva & Quinteros, 2010, p.76). Ese mismo fervor y decisión, al que se refieren los autores, se evidenció en todas las provincias del país en las que la ciudadanía se movilizó en marchas, se mantuvo en vigilia, incluso se trasladó de lugares rurales lejanos del Ecuador, hasta los ámbitos urbanos para expresar su solidaridad y apoyo al Presidente Correa.

Es importante señalar que la decisión de las FF.AA. de “apoyar la democracia”, se basó en dicha movilización popular, sabían que no podía irse en contra de una población que defendía “a su presidente”. Sin embargo, hay que decir que ésta no tuvo una magnitud equivalente a la aceptación masiva del Presidente que arrojan las encuestas, superior al 80% de respaldo a principios de octubre, lo cual también se evidenció una desorganización en las bases militantes de apoyo al proyecto oficialista, “así como una débil conciencia política de la ciudadanía que apoya al mismo. Si no cambia esto, el próximo intento no será un *putch*”, advierten (Sylva & Quinteros, 2010, p.78-80).

Otros actores políticos importantes en esta coyuntura fue tanto la derecha como la izquierda que están en la oposición, por razones distintas, pero a veces se coaligan, generando iniciativas muy confusas. La derecha en la oposición ha perdido capacidad de convocatoria a través de sus partidos políticos (Socialcristiano, Democracia Popular, Sociedad Patriótica), y si bien los mantiene en la palestra, no son los principales canales de expresión; éstos se han trasladado hacia los grandes medios de comunicación, “cuyas estrategias son controladas desde fundaciones privadas, que trabajan bajo el formato de *think tanks*, directamente financiados desde el exterior” (Hidalgo, 2010, p.102.105).

Es así que, el discurso de crítica de la derecha en la oposición proviene desde el anti-estatismo propio de la ideología neoliberal, “que mira horrorizada el retorno del Estado, con un claro intervencionismo, como lo proclama Correa; y económicamente proviene desde los sectores oligárquicos, cuyas fortunas se construyeron sobre formas atrasadas y extensivas de explotación”.

Por su parte, la izquierda tradicional y el movimiento indígena actúan a través de sus partidos (Pachakutik, MPD) y ciertos movimientos sociales, como el magisterio, estudiantes universitarios, sindicatos de empresas públicas y frecuentemente enfrentan las arremetidas del gobierno, incluyendo la penalización de los dirigentes populares de oposición, (Hidalgo, 2010). El discurso de crítica de la izquierda en la oposición proviene desde el sindicalismo y las formas agremiadas de clase, y también desde los sectores indígenas con un fuerte discurso étnico y de control territorial de los recursos naturales, como eje para las propuestas de plurinacionalidad.

Así se marcó una lucha entre los movimientos sociales y políticos del Ecuador, durante el gobierno de Correa. Todos estos acontecimientos, incluidos los del 30 de septiembre de 2010, mostraron a Correa, a dirigentes y partidarios de la Revolución Ciudadana que el “enemigo político no necesita ser moralmente malo, ni estéticamente feo (...) puede tener sus ventajas hacer negocios con él. Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta con que sea existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo” (Schmitt, 1932)

3.3. La Policía ecuatoriana, otra insurrección

Y, es que tal como Schmitt menciona el enemigo político produce conflictos que pueden o no resolverse, incluso enfrentar a un “amigo” que se piensa que son sus “aliados”; sin embargo, para Correa el hecho de confrontar a los miembros de la Policía puso en duda si ellos eran parte de su grupo de “amigos o enemigos”.

¿Y es que acaso inteligencia militar ecuatoriana falló al comunicar al Presidente que los miembros sublevados de la policía tenían un discurso netamente político generado por el Partido Sociedad Patriótica y que no reclamaban, puntualmente, sobre la Ley de Servicio Público? O ¿Correa quiso mostrar su “poder” de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía a los insurrectos y a un país entero?

Como árbitros del poder, los militares han sostenido o depuesto presidentes en los últimos años. Esto decepcionará a quienes creen que a Mahuad lo derrocaron los indígenas¹⁶, o que a Bucaram y a Gutiérrez los echaron movimientos ciudadanos¹⁷. Desde luego, esos hechos no se dieron en frío, sino cuando se había generado protesta social y movilización. Entonces los militares actuaron y retiraron el apoyo al gobernante y lo embarcaron bajo su custodia fuera del país (Ayala Mora, 2011).

Pero entendamos que es poder, Arendt (2005) explica al poder como un instrumento de mando, mientras que el mando se debe a las relaciones de dominación. “Si la esencia del poder es la eficacia del mando, entonces no hay poder más grande que el que emana del cañón de un arma, y sería difícil decir en qué forma difiere la orden dada por un policía de la orden dada por un pistolero” (p.65)

Por su parte, Schmitt (1927) plantea el concepto de poder como una “magnitud independiente”, más allá del consenso que haya logrado. Pero no solo esto, sino, que también es independiente respecto del poderoso mismo. “El poder es una magnitud

¹⁶ El derrocamiento del expresidente Jamil Mahuad ocurrió por un golpe militar y una masiva protesta ciudadana, protagonizada- en su mayoría- por la población indígena. Su caída del poder en el 2000, se selló tras el decreto de feriado bancario y congelamiento de depósitos de miles de cuentahorristas, sumado a la sustitución del sucre por el dólar, situaciones que hicieron estallar la presión social.

¹⁷ El 7 de febrero de 1997, el Congreso Nacional destituyó al expresidente Abdalá Bucaram por incapacidad mental. El artículo 100 de la Constitución vigente en ese tiempo, fue el argumento de los diputados para obligar al ex Jefe de Estado a cesar funciones. Salen alrededor de dos millones de personas al paro nacional y los líderes políticos piden un enjuiciamiento al mandatario. En el caso del expresidente Gutiérrez, la Rebelión de los Forajidos fue un movimiento liderado por población quiteña de clase media, que se mantuvo con el apoyo de varios sectores en las calles protestando contra el gobierno, el derrocamiento tuvo lugar del 13 de abril al 20 de abril de 2005.

objetiva, con reglas propias respecto de cualquier individuo en cuyas manos se encuentre. Es decir, que, hasta el más temible de los poderosos, sigue estando sujeto a los límites de la naturaleza física humana”.

Es decir que Correa mostró su “poder” a quienes debían ser parte de sus “amigos”, se rasgó las vestiduras (frase y acción literal) y se confrontó a la policía. Lo incentivó a que lo mataran. Correa con sus acciones, ¿no complació a sus antagonistas para que la violencia que se suscitaba tenga “legitimidad” y fuera él, el victimario y no víctima?

Referente a esto Arendt (2005) asegura que la legitimidad cuando se ve desafiada, se basa en una apelación al pasado mientras que la justificación se refiere a un fin que se encuentra en el futuro. “La violencia puede ser justificable pero nunca será legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuanto más se aleja en el futuro el fin propuesto. Nadie discute el uso de la violencia en defensa propia porque el peligro no sólo resulta claro, sino que es actual y el fin que justifica los medios es inmediato”, (p.70)

Surge otra inquietud. ¿Quién asegura que la policía es parte de los “amigos” de un Estado o de un Gobierno? Si a lo largo de la historia ecuatoriana y de nuestros países latinoamericanos, algunos policías y militares se han convertido en el “enemigo” del pueblo, acólito y protagonistas de las masacres más impunes, maquinadas por las dictaduras.

Lo que queda claro, para Ramírez (2010), es que el motín policial que se formó el 30-s fueron quienes iniciaron uno de los momentos de mayor violencia en el Ecuador. Los motivos fueron varios, nunca existió una sola razón, pues éste tan solo fue el detonante de varios sucesos ocurridos durante el gobierno correísta.

Por parte Ayala Mora (2011) cree que la supresión de condecoraciones y pagos extras fue sólo el antecedente inmediato de una situación que, al parecer, se estaba acumulando desde hacía tiempo. Una reacción como la que se produjo, por cierto, injustificable y repudiable en todo sentido, no podía ser cuestión de unas horas. Parece que en la Policía se ha gestado una situación de desconfianza respecto del gobierno y de rechazo al proyecto oficial de reorganizarla.

La administración Correa ha llevado adelante una política de limitación del ámbito de control de la Policía, que era muy necesaria. La institución policial acumulaba funciones,

además del control del orden público y la investigación criminal: manejo del tránsito y licencias; control de migraciones, estupefacientes, etc.; policía especializada, judicial y turística; labores de guardianía en instituciones públicas, con un pago adicional por ello. “Con el argumento certero de que una institución no debe concentrar demasiado control, varias de esas funciones le han sido retiradas, como el manejo de licencias, con no poco disgusto por parte de los miembros de la institución” (Ayala Mora, 2011, p.59).

Simmel (1977) aclara estos planteamientos, al explicar que a lo largo de la historia ha sido la lucha contra el hombre, contra otro hombre; por la conquista de un tercero. “El hombre es el ser más condensado y el más susceptible de aprovechamiento, y a medida que cesa la esclavitud, el apoderamiento mecánico del hombre, aumenta la necesidad de adueñarse espiritualmente de él”.

Por ello, la manipulación política constituye la horrorosa forma de valerse de otros, cuya ingenuidad o ignorancia los moviliza creyendo conquistar beneficios para sí, cuando en realidad, están moviendo cosas, para objetivos que ni lo imaginan y que “tutores” lo cosechan. La tropa policial, constituida siempre, por gente humilde y del pueblo- pero adoctrinada en el autoritarismo, “con el poder del uniforme y con armas- no resulta amigable para el ejercicio de derechos y de democracia, constituye caldo de cultivo para la manipulación peor cuando se trata del bolsillo que constituye el alma de la modernidad” (Carpio, 2010).

Carpio considera que el lema que levantó la oposición derechista en la Asamblea Nacional a los policías de la escolta Legislativa fue “les han quitado todo”, y corrió la voz y se amplificó en los medios.

“No se puede entender que en una noche se logre una coordinación a nivel nacional, algo se tejía y se planificaba, pero desde otras esferas. La manipulación fue perfecta, los tutores golpistas desaparecieron como quien tira la piedra y esconde la mano, y quedaron solos, una tropa enardecida, desbordada, desquiciada, sin control ni dimensionamiento de lo que hacían” (Carpio, 2010, p.167).

Por otra parte, la acción policial se inscribe en un conflicto que, además de lo nombrado anteriormente, va más allá de los acontecimientos de ese día y corresponde a las dificultades de reestructuración y renovación de una entidad que fue moldeada en los

patrones de la represión, el abuso, el clientelismo y la impunidad. Las inercias que se observan requerirán respuestas de fondo, creativas y transformadoras.

Pero en los afanes debilitadores, el profundo sentido anti-cambio del hecho policial termina siendo legitimado a nombre de un “justo reclamo”, asegura (León, 2010, p.82), ya que los derechos no bien manejado por el gobierno “pasan a segundo plano o se ignora lo que debería concitar una reacción urgente de todas y todos: los alcances de la violencia desplegada por los armados contra las autoridades y contra la sociedad”.

Para León (2010), las reacciones y disputas de esos días conformaron la necesidad de una transición, de un “ajuste de foco” de diferentes sectores a lo que significa una coyuntura de transformación, en la cual se redefinen ámbitos y roles de movimientos y gobierno, se mezclan sus aguas. “Esto supone construir conjuntamente una agenda de cambio como proceso -el maximalismo y el inmediateismo juegan en sentido contrario-, asumiendo que en ese camino abierto se conjugan la transformación del Estado y su institucionalidad y la transformación de la sociedad y sus expresiones organizativas”.

Es que el autor no se aleja de la realidad y en parte tiene razón, pues dentro del proceso que se buscaba cambiar el paradigma de la seguridad interna en el Ecuador, se examinó la reestructuración de la Policía Nacional, manifestado de manera institucional en el Plan Estratégico de Modernización y Transformación Integral de Policía Nacional del Ecuador para el siglo XXI. Previo a esto, la Policía Nacional gozaba de bajos niveles de aceptación dentro de la sociedad ecuatoriana, ligando siempre su actividad con actos de corrupción, abuso de poder, extorción y violación de los derechos humanos.

Y es que la historia así lo registra, desde 1979 la policía está plagada de irregularidades y abuso institucional, muchas veces utilizado como un organismo a disposición del gobierno como mecanismo de represión. La efectiva separación de los campos de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son elementos que jurídicamente responden a una visión relativamente moderna de la seguridad interna.

La Constitución de 1979 consideraba como primordial la defensa de la seguridad nacional, y no hacía una distinción efectiva entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional (ambas consideradas Fuerzas Públicas), lo que decantaba a favor de las Fuerzas Armadas (Rivera, 2011, p.239).

La policía tendría relevancia con la creación de los Servicios de Investigación Criminal (SIC), una instancia utilizada como herramienta antisubversiva en el gobierno de León Febres Cordero. A partir de entonces, la policía quedó marcada por problemas internos que se manifestaban en su eficiencia, en el grado de confianza y en la percepción de corrupción. Asimismo, la conformación de los servicios de inteligencia de la policía tuvo una formación paralela a los servicios de inteligencia militar. Ambas compartían las características de autonomía que generaron, en el caso de la Policía Nacional, que una institución civil se convierta en un organismo paraestatal, “autofinanciado” y poco transparente.

“Eso significó una cadena de mandos que no respondían a las autoridades civiles-gubernamentales y que tampoco estaban dispuestas a coordinar acciones con otras ramas de la inteligencia, principalmente con la de las Fuerzas Armadas. La inclinación policial fue, en este sentido, moldeada por la doctrina de la Seguridad Nacional. Para ejemplo, hasta la actualidad, (la policía) mantiene la palabra ‘frente’ para definir el ámbito de acción en el que trabaja” (Rivera, 2011, p.136).

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, además de delimitar las funciones de las Fuerzas Armadas, sirvió para establecer el nuevo marco de la Policía Nacional. Bajo esta ley, la “protección interna, el mantenimiento y control del orden público (...) corresponden a la Policía Nacional su ejecución” (Ley de Seguridad Pública y del Estado 2009). Dentro de estas funciones se incluía la lucha contra las “situaciones de violencia, delincuencia común y crimen organizado”. Al igual que con las Fuerzas Armadas, la participación de la Policía Nacional dentro de organismos civiles fue limitada, como respuesta a la posición “militarizada” de la policía.

Según el Ministerio del Interior del Ecuador, la modificación en la estructura de la Policía serviría para complementar este proceso de desmilitarización y, a su vez, llenar el vacío físico que dejarían las Fuerzas Armadas, una vez que sus funciones fueron redefinidas. Este empoderamiento de la policía para tomar un rol más determinante y extendido dentro de la seguridad interna implicaba una extensa reforma institucional, además de las correspondientes reformas legales y salariales. Por eso, adicional a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se inició el proceso de modernización de la Policía Nacional, detallado en el Plan Estratégico de Modernización y Transformación Integral de Policía Nacional del Ecuador para el siglo XXI, publicado en enero del 2010.

Dentro de los cambios institucionales más significativos, está el nuevo enfoque que se pretendió dar el Gobierno a la Policía Nacional: el de policía comunitaria. Esta reformulación de la policía buscaba crear una institución que funcione más eficientemente desde el nivel local, conjuntamente con las comunidades; la antítesis de lo que representaba en el pasado la policía. Este acercamiento buscaba generar mayores niveles de transparencia en la institución, además de revalorizar la labor del policía. La transformación tendría cuatro fases, cada una abordada desde una planificación alineada con el Plan Nacional del Buen Vivir y la Constitución. Los objetivos incluían mejorar los niveles de formación, fortalecer la capacidad operativa e institucionalizar un sistema de control para el control de la corrupción, señala el Ministerio del Interior del Ecuador.

A esto se le sumó una reestructuración del cálculo de salarios percibidos. La reforma llegó en la Ley Orgánica de Servicio Público (publicada en agosto del 2010), donde se reconoció a los agentes de la Policía Nacional (al igual que a las Fuerzas Armadas) dentro del Servicio Público. A través de esta Ley, se generaron escalas remunerativas establecidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, donde se hacía efectiva un alza salarial para los diferentes rangos, se reconocieron compensaciones en base particularidades de su trabajo, pero se eliminaron ciertos beneficios que recibían a manera de bonos y agasajos. Adicional, se ponía bajo rectoría del Ministerio de Educación las instituciones educativas que se encontraban administradas por la Policía Nacional (y también de las Fuerzas Armadas), de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público.

A partir de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica del Servicio Público, se generó insatisfacción y malestar dentro de ciertas facciones de la Policía Nacional que se decían afectadas por las nuevas disposiciones legales. Este sería un punto de quiebre dentro de la corriente por desmilitarizar la seguridad interna, pero todo esto orquestado por partidarios- que aún existen dentro de las Fuerzas Públicas- del ex presidente Lucio Gutiérrez.

Sin embargo, para Rivera (2011) lo que desnudó lo ocurrido en el 30 de septiembre, fue la fragilidad institucional de la policía. Además “de una serie de fallas dentro de los nuevos servicios de inteligencia, se evidenció una falta de alineamiento de un sector de la Policía Nacional con el proyecto político que buscaba modificar los paradigmas de la seguridad interna. Se requirió, una vez más, de la intervención de las Fuerzas Armadas para solucionar el conflicto. Las secuelas del 30 de septiembre dejaron muertos y heridos;

expusieron los recelos y la desconfianza que existía entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas” (p.83).

En esta oportunidad, las voces y lecturas coincidentes desde la derecha y desde otros costados opositores, cuestionan la presencia de Rafael Correa en el cuartel sublevado tildándola de prepotente, autoritaria, provocadora, temeraria y hasta machista. Se dice que el asunto debió ser encarado y resuelto a través de los ministerios respectivos dado que, se insiste, se trataba de una protesta por razones salariales (León, 2010).

Se distorsiona así lo que fue ante todo un gesto de responsabilidad frente una situación de enorme riesgo e inestabilidad para el país, pues León (2010) cree que “con el sólo hecho de no salir a las calles a cumplir sus tareas relativas a la seguridad, la policía creó un clima de caos de impredecibles consecuencias. Si a esto se suma la toma de la Asamblea Nacional y el cierre de aeropuertos, ocurridas al mismo tiempo, la situación era ya lo suficientemente crítica como para que el Presidente se ponga al frente. No rehuir las situaciones críticas ha sido una constante en este período al frente del gobierno, ésta, tan grave, no podía ser precisamente la excepción” (p.64).

Las relaciones de lucha no pueden producir una concreción por sí solas, pero colaboran con las otras energías unificadoras para construir entre todas las unidades vitales de un grupo (...) ni el amor, ni la división del trabajo, ni la actitud común frente a un tercero, ni la amistad, ni la pertenencia a un partido, ni la subordinación pueden construir por sí solas una unidad histórica y mantenerla de modo duradero (...) (Simmel, 1977).

3.4. Integración regional, ¿la salvación de Correa?

¿A lo mejor el intento golpista, quizá, hubiera resultado exitoso si Correa no contaba con la aceptación popular del 70%?, tal como señala la empresa Cedatos (empresa dueña de Ángel Polibio Córdoba, ex presidente del Banco Central en el gobierno de Gutiérrez). O la rápida y contundente solidaridad internacional que se comenzó a efectivizar ni bien se tuvieron las primeras noticias del golpe y que, entre otras cosas, precipitó la convocatoria a una reunión urgente y extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), en Buenos Aires. ¿Será que el apoyo de los gobiernos de izquierda que se vive en esta época fortalecieron la permanencia de Correa en la Presidencia?

Según Golinger (2010), el respaldo obtenido por Correa de los gobiernos sudamericanos y de varios europeos surtió efecto porque puso en evidencia que el futuro de los golpistas, en caso de que sus planes finalmente culminaran exitosamente, sería el ostracismo y el aislamiento político, económico e internacional. Se demostró, una vez más, que la Unasur funciona y es eficaz, y la crisis pudo resolverse, como antes la de Bolivia, en 2008, sin la intervención de intereses ajenos a América del Sur (p.9).

Los fundamentos del golpismo tienen profundas raíces en las sociedades latinoamericanas y en la política exterior de Estados Unidos hacia esta parte del mundo. Si se repasa la historia reciente de nuestros países se comprueba que las tentativas golpistas tuvieron lugar en Venezuela (2002), Bolivia (2008), Honduras (2009) y Ecuador (2010), es decir, en cuatro países caracterizados por ser el hogar de significativos procesos de transformación económica y social y, además, por estar integrados a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Ningún gobierno de derecha fue perturbado por el golpismo, cuyo signo político oligárquico e imperialista es inocultable. “Por eso el campeón mundial de la violación a los derechos humanos Álvaro Uribe, con sus miles de desaparecidos, sus fosas comunes, sus falsos positivos jamás tuvo que preocuparse por insurrecciones militares en su contra durante los ocho años de su mandato” (Boron, 2010, p.16).

Y es poco probable que los otros gobiernos de derecha que hay en la región vayan a ser víctimas de una tentativa golpista en los próximos años, porque de las cuatro que hubo desde el 2002 tres fracasaron y sólo una, la perpetrada en Honduras en contra de Manuel Zelaya, fue coronada exitosamente.

Lo paradójico es que en Honduras los hechos ocurrieron en el medio de la noche, lo cual impidió que la noticia fuese conocida hasta la mañana siguiente y el pueblo tuviera tiempo de salir a ganar calles y plazas. Cuando lo hizo ya era tarde porque Zelaya había sido desterrado. Además, en este caso la respuesta internacional fue tardía, careciendo de contundencia, tal como sucedió o en el caso ecuatoriano.

Boron (2010) considera que éstas son lecciones, los agentes deben aprender: “la rapidez de la reacción democrática y popular es esencial para desactivar la secuencia de acciones y procesos del golpismo, que rara vez es otra cosa que un entrelazamiento de iniciativas que, a falta de obstáculos que se interpongan en su camino, se refuerzan recíprocamente, pues considera que la respuesta popular no surge de inmediato el proceso se retroalimenta, y cuando se lo quiere parar ya es demasiado tarde” (p.12)

Para Paz y Miño (2010), los sucesivos pronunciamientos de presidentes o jefes de gobierno de distintos países del mundo en apoyo a la democracia en Ecuador, condenando la insubordinación policial y rechazando cualquier intento de “golpe de Estado”. Las dos reacciones diplomáticas más importantes el mismo 30 de septiembre fueron: la convocatoria urgente para una reunión extraordinaria de jefes de gobierno de Unasur y otra para una reunión similar de cancilleres en Ecuador.

La noche del 30-S comenzó con la Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, República Argentina, que duró hasta la madrugada del siguiente día, cuando se acordó emitir una Declaración. En ella se reafirma el compromiso para preservar “la institucionalidad democrática, el estado de derecho, el orden constitucional, la paz social y el irrestricto respeto a los derechos humanos”; se condena “enérgicamente el intento de Golpe de Estado y el posterior secuestro del Presidente Rafael Correa Delgado registrado en la hermana República del Ecuador el 30 de septiembre”; se celebra “la liberación del Presidente Correa Delgado así como la pronta

vuelta a la normalidad institucional y democrática”; se expresa “la necesidad de que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados”.

Y lo mismo cabe decir de la solidaridad internacional, que para ser efectiva tiene que ser inmediata e intransigente en su defensa del orden político imperante. Estas condiciones se dieron en el caso ecuatoriano, y por eso la tentativa golpista fracasó. “Pero no hay que hacerse ilusiones, pues la oligarquía y los poderes hegemónicos volverán a intentar, tal vez por otras vías, derribar a los gobiernos que no se doblegan ante sus intereses” (Boron, 2010, p.20).

Luego del retroceso sufrido por la democracia latinoamericana en Honduras, golpistas en América Latina cuentan ya con la versión actualizada del manual del golpe de Estado: primero, destituir al presidente elegido (con mayor razón si se trata de un gobierno con políticas anti hegemónicas); segundo, asimilar el repudio formal de la comunidad internacional; tercero, convocar a elecciones y manipularlas para evitar cualquier rebrote del movimiento derrocado; y cuarto, esperar que una parte de la comunidad internacional apruebe el nuevo gobierno ilegítimo, surgido del sufragio fraudulento. Una forma muy eficiente de camuflar un golpe de Estado para interrumpir el proceso democrático (Falconí, 2010).

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en forma unánime, al igual que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyendo a Colombia y Perú, condenaron el intento de golpe de Estado en Ecuador. Incluso, Unasur aprobó una cláusula de defensa democrática, la cual incluía medidas concretas e inmediatas tales como cierre de fronteras, suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, servicios y otros suministros a los gobiernos ilegítimos. Después del golpe de Estado en Honduras la región no está para elevar a sectores reaccionarios, desleales con los principios democráticos.

3.4.1. Develando el Nuevo Plan Cóndor

Hace 40 años, América Latina fue víctima del denominado: Plan Cóndor, el cual tenía como objetivo fortalecer las dictaduras militares de América del Sur comandada por los Estados Unidos. El Plan Cóndor fue conocido como una iniciativa impulsada por los departamentos de Inteligencia de los Estados Unidos, durante los años setenta y ochenta para derrocar a gobiernos socialistas, como el de Salvador Allende en Chile, a través de acciones subordinadas por parte de la Fuerza Pública. A esto se sumaron miles de asesinatos a los líderes de izquierda en todo el continente.

En la actualidad, el nuevo Plan Cóndor consiste en que “los poderes fácticos, que hemos osado desafiar, utilizan métodos como el bombardeo mediático, los golpes de Estado parlamentarios, el acoso económico, la difamación de líderes democráticamente electos, los jueces venales, entre otros métodos, para tratar de recuperar sus espacios perdidos”, así lo explicó el Presidente Rafael Correa, durante su discurso en el III Encuentro Progresista Latinoamericano (Elap), realizado el septiembre de 2016 en Quito- Ecuador.

Y es que el Presidente del Ecuador lo definió bien y no lejos de los acontecimientos geopolíticos, pues este año estuvo cargado de transgresiones en contra de la soberanía de los países de la región. Tal como sucedió en Brasil, con el Gobierno de la ex presidenta Dilma Rousseff, elegida democráticamente, quien fue víctima de un golpe de Estado, en mayo de 2016, por un parlamento “retardatario y corrupto de Brasil”. “Golpe frente al cual la gran parte del mundo ha guardado silencio, verificándose una vez más la doble moral que impera en las relaciones internacionales”, cuestionó el Presidente Correa.

La intención de este plan era reprimir y perseguir a todo el que hacía oposición política a los regímenes dictatoriales del Cono Sur, es decir, eliminar a enemigos políticos para de esta manera instalar políticas neoliberales. El principal objetivo era luchar contra el comunismo y evitar su expansión en la región, de acuerdo a una investigación de la cadena televisiva internacional Telesur.

En la actualidad, el nuevo Plan Cóndor pretende que la derecha vuelva a tener el control de las naciones- históricamente sometidas por regímenes represivos- mediante el desprestigio de los avances sociales alcanzados por los gobiernos de corte socialista. Una muestra de esto es lo que ocurre en Argentina, con la llegada del Gobierno neoliberal

de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, quien desde inicios de su mandato sus primeras medidas fueron: privatizar las instituciones estatales, despidos masivos en el sector público, censura de medios de comunicación e impases contra países con gobiernos progresistas como Venezuela.

Frente a esto, “se observa un proceso de restauración conservadora y una recomposición de fuerzas de derecha que actúan mediante esquemas como la judicialización de la política y los distintos golpes de Estado”, dijo el Primer Mandatario ecuatoriano, quien al tiempo recordó los distintos intentos golpistas, como lo ocurrido en el continente.

Estas coaliciones concebidas por los grupos hegemónicos pretenden tomarse nuevamente las naciones ya reestructuradas por los gobiernos socialistas; su fin desconfigurar las políticas públicas con justicia social, por principios de mercado.

4. CONCLUSIONES

El episodio de violencia que vivió hace siete años el Ecuador marcó la historia del país y puso en vilo la democracia de una nación. Las estrategias de los grupos neoliberales y los grupos hegemónicos (tanto externos, como internos) fueron- al parecer- quienes protagonizaron este suceso, manipulando a los movimientos sociales y políticos de oposición, sirviéndose de un proyecto reformista a la Ley de Servicio Público, que fue planteado con el objetivo de buscar el bienestar de la fuerza pública, sin embargo los Policías cooptados y partidarios del expresidente Lucio Gutiérrez manipularon la información para usarlo de carnada para atentar contra el Presidente Correa y volver “legítimo” un golpe de Estado.

En la coyuntura política, es evidente que las fuerzas antagónicas al actual régimen, expresadas esencialmente en la nueva derecha¹⁸, intentan recomponer sus objetivos con el afán de alcanzar el poder, como vivió Ecuador hace unos años donde los gobiernos neoliberales tenían el control absoluto de la situación política del país; con ello las decisiones económicas y sociales siempre fueron direccionadas a favor de los grandes grupos oligárquicos del Ecuador, mientras ellos llenaban sus bolsillos las clases más necesitadas se hundían en la pobreza y las brechas de la desigualdad eran cada vez más amplias.

Los movimientos sociales y políticos afines al oficialismo hablan que Ecuador ha tenido, en estos 10 años de gobierno del presidente de la República Rafael Correa, un renacimiento, donde la cifras muestran el cambio radical que ha tenido el país “ingobernable”. Según la Cepal, “Ecuador es el país en Latinoamérica que más ha reducido desigualdad, disminuido en 8 puntos la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini, reducción 4 veces superior al promedio de América Latina, una de las pocas regiones en el mundo que ha cortado brechas”¹⁹.

¹⁸ “La nueva derecha es pos-neoliberal. Aunque sus programas económicos incluyen las conocidas prescripciones pro-mercado, son escasas las menciones explícitas a las políticas de desregulación, privatización y apertura comercial que constituían el núcleo básico del Consenso de Washington, según José Natanson, columna de opinión del diario *Le Monde Diplomatique*, noviembre 2014.

¹⁹ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Panorama Social de América Latina*, Santiago de Chile, 2014.

A pesar de todo esto, los antagonistas de Correa consideran que los cambios políticos y socioeconómicos de esta revolución no han favorecido al país, al contrario, lo han endeudado más, a pesar de que este gobierno vivió una bonanza petrolera. Las múltiples reformas y nuevos proyectos normativos causaron malestar en varios sectores sociales y políticos ecuatorianos, ya que se tomaron decisiones unilaterales sin una previa socialización de las leyes planteadas. Esto provocó malestar en los diferentes frentes políticos y se dieron varios hechos violentos como el vivido en el 30-S.

Como diría Arendt (2005), “si sólo el ejercicio de la violencia hiciera posible la interrupción de procesos automáticos en el dominio de los asuntos humanos, los predicadores de la violencia habrían conseguido una importante victoria”.

¿Cuáles han sido los resultados de los acontecimientos violentos en las naciones, ¿la victoria? ¿el poder? El poder real lo tiene el pueblo, fue la respuesta de varios de los analistas consultados, pues mencionaron que quienes salieron a “defender” la democracia en el Ecuador- durante el 30-S, fueron movimientos ciudadanos heterogéneos: militantes de Alianza PAIS, ciudadanos comunes, estudiantes, grupos indígenas, jóvenes, etc.

Por otra parte, los Policías fueron los protagonistas de uno de los acontecimientos más vergonzosos de la historia del Ecuador, que tuvo como resultado: muertes, desconfianza, desestabilización, fuga de la inversión extranjera, inestabilidad económica.

El presidente Correa, al presentarse en el Regimiento Quito #1, provocó con sus palabras efusivas a los elementos de la Policía Nacional que se encontraban ahí. Acaso, ¿sus asesores fallaron?, ¿sus ministros fallaron? ¿así como la Inteligencia Militar? El camino de un diálogo previo, con mayor fuerza (con los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana) de la normativa y una firme estrategia política, hubiesen, tal vez, sido la línea de la hoja de ruta correcta.

La violencia y el poder no son realidades circunstanciales como afirma Pecaute, por lo que todos los agentes sociales no deben ser inmunes a los acontecimientos de la sociedad. El poder de un pueblo movilizado fortalece la democracia, establece las ideologías, converge acuerdos por lograr un mejor país y eso mostraron los ecuatorianos un 30 de septiembre de 2010, el rehusar a volver al pasado donde la oligarquía predominaba, donde las mafias

de la derecha imponían sus valores morales y dogmáticos ante un pueblo supuestamente sumiso, (Ramírez, 2010)). Esta es quizás la respuesta analítica a la pregunta que nos hacíamos al emprender este estudio, qué hizo diferente el resultado, esta vez ante el intento de recurrir a la violencia para derrocar un gobierno legítimo?

Los movimientos sociales y políticos han sido actores y protagonistas de hechos que han transformado- para bien o para mal- a la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010 ha sido un caso inédito, pues por primera vez en la historia del Ecuador los actores sociales y políticos salieron a las calles a protestar en pro de un líder de gobierno, cuando esta nación se caracterizaba por marchas populares homogéneas con un objetivo en común: poner fin al gobierno de turno.

Lo registrado el 30-S muestra que la dinámica de los movimientos sociales y políticos tuvieron un giro atípico, apegado a sus ideales y a favor de mantener un proyecto político progresista y ciudadano.

Finalmente, la hipótesis subyacente en este trabajo, el cual responde a explicar o a hacer conjeturas sobre las posibles razones que permitieron que los sucesos del 30-S no culminaran en un golpe de estado contra el presidente Correa, como había ocurrido en el pasado con otros gobernantes del Ecuador. La fórmula ya había sido ensayada antes y había sido exitosa. Esta vez no. Y esto es lo que hace interesante este desafío analítico, por lo que hemos especialmente fijado nuestra atención en el análisis del levantamiento Policial que no tuvo apoyo popular, el pasado y la imagen represiva de la Policía no generaron mucha simpatía de masas.

Por otro lado, no lograron concitar la solidaridad de las Fuerzas Armadas que permanecieron con Correa, otro factor fueron las manifestaciones populares de apoyo al Presidente.

Los analistas del suceso señalan que, además, el enfrentamiento directo y personal de Correa con los sublevados, el coraje que mostró y su arrojo, fueron elementos claves en el resultado del suceso. También la rápida movilización internacional en apoyo del régimen legítimo de Correa.

5.- BIBLIOGRAFÍA:

Arendt, Hannah (2005), *Sobre la violencia*. Madrid, España: Alianza editorial.

Ayala Mora (2011), Del Neoliberalismo Al “Socialismo Del Siglo XXI. Observatorio Latinoamericano 7. Dossier Ecuador, Buenos Aires- Argentina.

Borja, Rodrigo (1997), *Enciclopedia de la Política*, Fondo de Cultura Económica. Quito-Ecuador

Boron, Atilio (2010), *Nota sobre el frustrado golpe de Estado en Ecuador*. Buenos Aires, Argentina: Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED).

Bruckmann, Mónica & Dos Santos, Theotonio (2005). *Los movimientos sociales en America Latina: un balance historico*. En: *Semináro Internacional REG GEN: Alternativas Globalizaçõ, Río de Janeiro, Brasil UNESCO*.

Carrillo, Ricardo (2003), Movimientos sociales y hegemonía. En: Aportes Andinos No.6. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Programa Andino de Derechos Humanos.

Castells Manuel (1999), La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad. Siglo veintiuno editores. México.

Carpio, Patricio (2010), *De la chacota de los chapas a la desestabilización democrática*. Quito, Ecuador: Fundación OFIS.

Constitución Política de la República del Ecuador (1979) Quito.

Coole, D. (2005), "Rethinking Agency: A Phenomenological Approach to Embodiment and Agentive Capacities" en *Political Studies*, vol. 53, núm. 1, Sheffield: UK Political Science Association, pp. 124–142.

Camou, Antonio (Estudio preliminar y compilación) (2001). *Los desafíos de la Gobernabilidad*. México: Flacso/IISUNAM/Plaza y Valdés.

CUEVA, Agustín (1990). *El Ecuador de 1925 a 1960, Nueva Historia de Ecuador*, vol. 10, Quito, Corporación Editora Nacional.

Cedib: ¿Qué es y cómo se hace un análisis de coyuntura? Cochabamba, 2006. <http://www.cedib.org/pdocumentos/educacion/modulo12.pdf>

Departamento de Comunicaciones del INCEP: Cómo hacer un análisis de coyuntura. Guatemala, 2002. <http://www.inep.org/publicaciones/cdeformacion/coyuntura.pdf>

Diario El Universo, especial 30 de septiembre: <http://www.eluniverso.com/tema/30-septiembre>

Diario El Comercio, especial 30-s subordinación policial: <http://especiales.elcomercio.com/2011/09/30s/>

Documental Muchedumbre 30-s. www.muchedumbre30s.com

Engels, Federico, *La Revolución de la Ciencia de Eugenio Duhring (Anti-Duhring)* (1878). Moscú, Rusia: Instituto Marxismo-Leninismo & Editorial Progreso.

Flisfisch, Ángel (1989), *Gobernabilidad y consolidación democrática: sugerencias para la discusión*. En *Revista Mexicana de Sociología*, N.- 89/3. México.

Gramsci, Antonio (1975), *Los Cuadernos de la Cárcel*, Turín- Italia: Edición crítica del Instituto Gramsci.

Golinger, Eva (2010), *La derecha al ataque contra ALBA*. www.revelión.org

Falconí, Fander & Oleas Julio (2010), *Reforma institucional y las secuelas del 30-S*, ÍCONOS revista de las Ciencias Sociales. Flacso- Ecuador.

Kuri, Elvira (2013), *Representaciones y significados en la relación espacio-sociedad: Una reflexión teórica*. Universidad Autónoma de México. Sociológica N.- 28. D.F.- México.

Jiménez Juan Ignacio (2015), *Acerca de la producción de actores sociales*, Universidad de Chile, Santiago- Chile

Le Monde Diplomatique, columna de opinión: *La nueva derecha en América Latina*, por José Natanson, noviembre de 2014. Mas en <http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/185-el-empleo-en-peligro/la-nueva-derecha-en-america-latina/>

León, Magdalena (2010), *Reinterpretar para debilitar: las opciones del cambio en Ecuador*. Quito, Ecuador: Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía (Remte).

Ley Reformativa a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Quito: Memorando N.- PAN-FC-2010

Marx, Karl (1852), *El 18 de Brumario de Luis Bonaparte*, Nueva York- EEUU, en la revista *Die Revolution*.

Melucci, Alberto (1995). *El conflicto y la regla*. Movimientos sociales y sistemas políticos. *Revista Sociológica*. México

Muñoz, Francisco (1997). *Intervención en el Lanzamiento del libro: el Mito de la Gobernabilidad*, Mimeo.

Mouffe, Chantal (2014). *Agonística. Pensar el mundo políticamente*. Fondo de Cultura Económica, 2014. Buenos Aires- Argentina.

Ministerio de Interior del Ecuador: www.ministeriointerior.gob.ec

Periódico El Ciudadano: <http://www.elciudadano.gob.ec/intento-de-golpe-de-estado-del-30-s-no-quedara-en-la-impunidad/>

Presidencia de la República del Ecuador: www.presidencia.gob.ec

Ospina, Pablo (2010), *¿Intento de Golpe o motín policial?* Universidad Andina Simón Bolívar. Quito- Ecuador

Ortiz, Santiago (2010), *La vulnerabilidad del liderazgo de la revolución Ciudadana y de la Institucionalidad en Ecuador*, ÍCONOS: Revista de Ciencias Sociales, Flacso-Ecuador.

Pachano, Simón (1997), *Gobernabilidad: moda o necesidad*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Quito

Paz y Miño Cepeda, Juan (2010), *El '30-S' en Ecuador: insurrección vs. democracia. Un episodio de Historia Inmediata*, Boletín del Taller de Historia Económica (THE), Quito, septiembre de 2010, No. 06,

Pecaut, Daniel (1996), *Presente, pasado y futuro de la violencia*. Paris, Francia.

Prats, Joan (2001), *Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco conceptual y analítico*. *Instituciones y desarrollo*, N° 10. IIG/PNUD/Generalitat de Catalunya.

Ramírez Gallegos, Franklin (2007), *Giro en la izquierda*, en *Revista Entre Voces*, No. 10. Quito- Ecuador.

Ramírez Gallegos, Franklin (2010), *Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), OSAL N.- 28. Buenos Aires- Argentina.

Ramírez Gallego, Franklin (2012) “Despliegues de la autonomía estatal en el Ecuador de la Revolución Ciudadana”, 2012, en *Debates y Combates*, No. 4, noviembre-diciembre.

Rivera, Fredy (2011), *La inteligencia ecuatoriana: tradiciones, cambios y perspectivas. En Inteligencia estratégica y Prospectiva*. Quito, Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Schmitt, Carl (1927), *El Concepto de lo Político*. Chicago-EEUU: Universidad de Chicago.

Simmel, Georg (1977), *Sociología: Estudio sobre las formas de socialización*. Cap. 1: La Lucha. Madrid, España: Revista de Occidente.

Scharpf, F. W. (1997), *Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy Research*. Boulder: Westview Press.

Sibeon, R. (1997), *Contemporary Sociology and Policy Analysis: The New Sociology of Public Policy*. Londres: Kogan Page and Tudor.

Sylva, Erika & Quintero Rafael (2010), *Ecuador: la alianza de la derecha y el corporativismo en el "putch" del 30 de septiembre de 2010*. Quito, Ecuador: Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (Fedaeys).

Santos, Boaventura de Sousa (2010), Para una democracia de alta intensidad (Tema Central) En: Ecuador Debate. ¿La democracia en sus límites?, Quito: Centro Andino de Acción Popular CAAP.

Touraine, Alain (1997), *¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: el Destino del Hombre en la Aldea Global*. México

Unsa Mario (2011), *Reconocimiento y negación. la azarosa relación entre el gobierno de correa y los movimientos sociales*. Observatorio Latinoamericano 7. Dossier Ecuador, Buenos Aires- Argentina.

Vallejo, Sebastián (2014), *Angostura, 30-s y la militarización de la seguridad interna*. Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. Lucha. Madrid, España: Revista de Occidente.

Verdesoto Luis & Adaya Gloria (2010), *Escenarios políticos ecuatorianos luego del 30-S*, La Tendencia, Flacso- Ecuador.

6.- ANEXOS

6.1.- Gráficas de lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, en Ecuador

1.- Policías forcejeando con la seguridad del Presidente Rafael Correa



2.- Presidente Rafael Correa intentando salir del Regimiento Quito N.- 1



3.- Policías sublevados protestando a las afueras del Regimiento Quito N.- 1



4.- Jóvenes protestando en las calles de Quito, exigiendo la liberación de Rafael Correa



5.- Diversos movimientos sociales y políticos marchan hacia el Palacios de Carondelet, para mostrar su respaldo al Presidente Correa



Fuente: Medios de comunicación nacional: La Hora, El Comercio, Agencia Andes.